

**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Argentina
Área de Desarrollo, Innovación y Relaciones Estado-Sociedad
Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático
Ciclo 2020/2021**

Tesis de Maestría:

**Análisis sobre la movilización de recursos financieros
climáticos en las Antillas Menores del Caribe y el alineamiento con
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (2016-2020)**

Marzo de 2024

**Autor: Angel M. Carrasquillo Benoit
Directora: Virginia Scardamaglia**

Resumen

Esta investigación analiza la movilización del financiamiento climático hacia Antigua y Barbuda, Dominica, y Santa Lucía durante 2016-2020, enfocándose en la alineación con sus primeras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En un contexto de vulnerabilidad creciente ante el cambio climático, este estudio se propone evaluar si el financiamiento climático recibido por estas naciones insulares refleja sus objetivos climáticos establecidos, apuntando a la mitigación y adaptación como elementos cruciales en sus estrategias de desarrollo sostenible.

La metodología se fundamenta en un enfoque mixto que incluye análisis cuantitativo de datos sobre financiamiento climático y evaluación cualitativa mediante revisión de NDC y entrevistas con expertos. Este enfoque permitió identificar las fuentes de financiamiento, los sectores destinatarios, y examinar la coherencia entre los fondos recibidos y las prioridades nacionales en materia climática.

Los resultados revelan un panorama complejo en el que, si bien se observa un alineamiento parcial entre el financiamiento recibido y las NDC, persisten brechas significativas en la magnitud de los fondos movilizados, especialmente en lo concerniente a proyectos de adaptación. Se identificó que, a pesar de esfuerzos innovadores para atraer inversiones en resiliencia climática y la creación de entidades dedicadas a mejorar la gestión de recursos, el financiamiento climático aún no cumple con las necesidades estimadas para una acción climática suficiente. Además, se destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional y la capacidad nacional para la planificación y ejecución de proyectos climáticos.

Por ende, se enfatiza la urgencia de incrementar la movilización de recursos adicionales y la necesidad de innovar en mecanismos de financiamiento locales e internacionales. Se subraya la relevancia de adoptar una estrategia multifacética que incluya la mejora de marcos regulatorios, el desarrollo de proyectos atractivos para la inversión, y la implementación de sistemas robustos de monitoreo y evaluación. A través de este estudio, se espera contribuir al entendimiento de los desafíos y oportunidades en la gestión del financiamiento climático en las Antillas Menores del Caribe.

Índice

Introducción	6
I. Marco Teórico	9
I.1 Cooperación Internacional	10
I.2 Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas	12
I.3 Metodología	13
I.4 Estado del Arte	14
I.5 Selección de los casos de estudio: Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía	17
II. Movilización de Recursos Financieros hacia las SIDS	19
II.1 Instrumentos de Financiamiento Climático	22
II.1.a Instrumentos Tradicionales	23
II.1.b Instrumentos Novedosos	24
II.2 Alineamiento del financiamiento climático con las NDC	28
III. Contribuciones Nacionales Determinadas establecidas en las Antillas Menores del Caribe	32
III.1 Contribuciones Nacionales Determinadas de Antigua y Barbuda	34
III.1.a El Financiamiento Climático en Antigua y Barbuda	37
III.1.b Financiamiento Climático recibido en Antigua y Barbuda durante el periodo 2016-2020	39
III.2 Contribuciones Nacionales Determinadas de Dominica	45
III.2.a El Financiamiento Climático en Dominica	48
III.2.b Financiamiento Climático recibido en Dominica durante el periodo 2016-2020	49
III.3 Contribuciones Nacionales Determinadas de Santa Lucía	54
III.3.a El Financiamiento Climático en Santa Lucía	57
III.3.b Financiamiento Climático recibido en Santa Lucía durante el periodo 2016-2020	58
IV. Conclusiones	64
Bibliografía	68
Anexos	78

Índice de Figuras

Figura 1: Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Sector, 2016-2020	41
Figura 2: Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Instrumento, 2016-2020	42
Figura 3: Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Fuente, 2016-2020	44
Figura 4: Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Propósito, 2016-2020	45
Figura 5: Financiamiento Climático para Dominica Por Sector, 2016-2020	50
Figura 6: Financiamiento Climático para Dominica Por Instrumento, 2016-2020	51
Figura 7: Financiamiento Climático para Dominica Por Fuente, 2016-2020	52
Figura 8: Financiamiento Climático para Dominica Por Propósito, 2016-2020	53
Figura 9: Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Sector, 2016-2020	60
Figura 10: Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Instrumento, 2016-2020	62
Figura 11: Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Fuente, 2016-2020	63
Figura 12: Financiamiento Climático para Santa Lucía Propósito, 2016-2020	64

Índice de abreviaturas y acrónimos

5Cs- Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe
AF- Fondo de Adaptación
AFOLU- Agricultura, Forestal y Cambio de Uso de Suelo
BAU- Business as Usual
BID- Banco Interamericano de Desarrollo
BM- Banco Mundial
BUR- Reporte Bienal Actualizado
CBDR- Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas
CCRIF- Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
CDB- Banco de Desarrollo del Caribe
CMNUCC- Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CNUMAD- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
CIF- Fondo de Inversión Climática
CREAD- Agencia de Ejecución de la Resiliencia Climática
CTCN- Climate Technology Centre and Network
CTF- Fondo de Tecnología Limpia
DOE- Departamento para el Medio Ambiente
FAO- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GCF- Fondo Verde para el Clima
GEF- Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI- Gases de Efecto Invernadero
GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
NAP- Plan Nacional de Adaptación
NDC- Contribuciones Nacionalmente Determinadas
NREL- National Renewable Energy Laboratory
MDL- Mecanismo de Desarrollo Limpio
MRV- Medición, Reporte y Verificación
OCDE- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
PD- Países Desarrollados
PED- Países en vías de Desarrollo
PNUD- Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PCR- Programa de Resiliencia Climática
PIB- Producto Interno Bruto
PPCR- Programa Piloto para la Resiliencia Climática
SCF- Fondo Estratégico para el Clima
SIDS- Pequeñas Islas en Desarrollo

Introducción

El financiamiento climático es un tema de debate crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que implica la asignación de recursos financieros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fortalecer la resiliencia ante los impactos negativos del cambio climático. A pesar de que el Comité Permanente de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) describe el financiamiento climático como “las finanzas relacionadas a la reducción de las emisiones de GEI y que también tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad con el fin de mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los impactos negativos del cambio climático” (CMNUCC, 2014), no hay suficiente consenso entre los Estados para apoyar un concepto unificado.

Sin duda alguna, la implementación del Acuerdo de París y de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de los países requiere de la movilización de recursos financieros considerables, especialmente para las pequeñas islas en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) y los países menos desarrollados, que a menudo tienen recursos internos limitados y enfrentan barreras estructurales para acceder al financiamiento climático público e internacional como: la falta de capacidad institucional, los elevados costos de transacción, los criterios de elegibilidad poco claros y los bajos niveles de participación del sector privado (UN-OHRLLS, 2022). Dicho esto, es importante hacer una distinción entre los países en vías de desarrollo (PED) y las SIDS. Si bien las SIDS se consideran vulnerables en el contexto del financiamiento climático internacional, algunos de estos países son de altos ingresos. A pesar de esto, su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático justifica su inclusión en mecanismos de financiamiento internacional. Esta distinción es clave, ya que aunque todos los PED enfrentan retos para acceder a financiamiento climático, las SIDS experimentan desafíos adicionales debido a su tamaño, geografía y susceptibilidad a desastres climáticos (Mohan, 2023b).

Por ende, es importante comprender y examinar los desafíos y las oportunidades del financiamiento climático en las SIDS, centrándose en algunas de las islas que se encuentran en las Antillas Menores en el Caribe. Dicha región se encuentra entre las más vulnerables al cambio climático por las amenazas que se representan en el aumento del nivel del mar, el aumento en la intensidad de los huracanes y exceso en los patrones pluviales (Nurse et al. 2014). Debido a sus altos niveles de vulnerabilidad, la resiliencia ante el cambio climático se convierte en una prioridad para estas naciones, que también enfrentan altos niveles de deuda

pública y tasas de crecimiento económico limitadas. Es crucial que el financiamiento climático sea más ambicioso a nivel internacional para satisfacer las necesidades actuales y disminuir la vulnerabilidad de las islas ante los impactos climáticos que se encuentran en constante aumento (Acevedo, 2016). Por ende, las islas han estado promoviendo activamente un financiamiento climático nivel internacional y público que sea suficiente para responder a las necesidades actuales que requieren para disminuir su vulnerabilidad (UN-OHRLLS, 2022).

Para comprender y analizar efectivamente la movilización de recursos financieros en las SIDS, es crucial evaluar si el financiamiento climático se ajusta y es suficiente para cumplir con sus respectivas NDC. Esto nos permite entender si se está cumpliendo con el Acuerdo de París y si dicho compromiso está en línea con las metas condicionadas, es decir, los objetivos que se establecen en las NDC y que están sujetos a la provisión de apoyo internacional en forma de financiamiento, transferencia de tecnología o construcción de capacidades (UNFCCC, 2015) de las SIDS. Bajo el marco teórico del liberalismo en las relaciones internacionales, se busca investigar si el financiamiento climático recibido está alineado con el fin de determinar el papel de la cooperación internacional en la consecución de los objetivos establecidos. La cooperación internacional juega un papel crucial en el apoyo a las SIDS para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático, ya que estas naciones enfrentan amenazas significativas debido a su vulnerabilidad a los impactos climáticos. El alineamiento del financiamiento climático con las NDC de las SIDS es fundamental para garantizar que los recursos financieros sean suficientes para la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Las medidas de mitigación hacen referencia a las acciones y políticas implementadas para reducir o limitar las emisiones de GEI, con el objetivo de frenar el cambio climático; mientras que las medidas de adaptación se refieren a las acciones y estrategias diseñadas para reducir la vulnerabilidad de un país o comunidad a los efectos adversos del cambio climático, fortaleciendo su capacidad para hacer frente a estos impactos (IPCC, 2018).

Ahora bien, la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación son elementos esenciales en el proceso de movilización de recursos financieros para las SIDS. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que el financiamiento climático se utilice de manera adecuada y contribuya al logro de los objetivos climáticos de estas. Habiendo dicho esto, la pregunta a investigar es: ¿están alineados los recursos financieros movilizados hacia las SIDS para cumplir con sus respectivas NDC?

La hipótesis planteada sugiere que los recursos financieros movilizados a través de los instrumentos públicos e internacionales de financiamiento climático en el período 2016-2020 no están adecuadamente alineados para cumplir con las metas de las NDC. Esto plantea una

preocupación significativa, ya que la implementación de las acciones climáticas de estas SIDS está estrechamente relacionada con la disponibilidad correcta y suficiente asignación de recursos financieros. No obstante, el uso de dichos recursos también depende de la capacidad institucional de los países para implementarlos, lo cual puede ser un factor determinante en la consecución de resultados positivos (Buchner et al., 2021; Mohan, 2023b).

El objetivo general de la investigación es evaluar si existe un alineamiento entre la movilización de recursos financieros por parte de los países desarrollados (PD) hacia las islas de las Antillas Menores del Caribe para el cumplimiento de sus respectivas NDC. Asimismo, como objetivo específico, se aspira a determinar y examinar las procedencias del financiamiento, los sectores destinatarios de dichos fondos y el propósito puntual de estos, ya sea con fines de mitigación, adaptación o de carácter transversal, esta última hace referencia a aquellas metas o acciones que abarcan múltiples sectores o áreas de intervención, siendo relevantes tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático (UNFCCC, 2016).

I. Marco Teórico

La teoría del liberalismo en las relaciones internacionales, reconocida por su enfoque en la cooperación, las instituciones y los valores compartidos, ofrece un marco analítico pertinente para comprender las dinámicas de financiamiento climático, especialmente en el contexto de las Antillas Menores del Caribe entre 2016 y 2020. Esta teoría postula que la cooperación internacional, promovida por figuras como Robert Keohane, es fundamental para afrontar retos globales como el cambio climático, subrayando la importancia del trabajo conjunto, el intercambio de información y la distribución equitativa de costos y beneficios asociados a la acción climática (Keohane, 2010).

Desde esta perspectiva, el liberalismo ilustra cómo la gobernanza climática global se beneficia del multilateralismo y la cooperación internacional, enfatizando el papel crucial de las organizaciones internacionales y los gobiernos en fomentar una acción climática conjunta. Esta aproximación reconoce la necesidad de considerar las distintas vulnerabilidades, responsabilidades y capacidades de los países al movilizar recursos financieros para el clima, adoptando el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés) como piedra angular para la asignación y movilización de dichos fondos.

Además, el liberalismo destaca la importancia de los actores no estatales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las entidades filantrópicas, en la promoción del financiamiento climático y en la legitimación de la gobernanza climática. Este enfoque subraya la convergencia de intereses y aspiraciones de los estados a través de la negociación, el acuerdo y la reciprocidad, aspectos cruciales para la movilización del financiamiento climático.

No obstante, la teoría del liberalismo no está exenta de críticas en lo que respecta al financiamiento climático. Se le critica por no abordar adecuadamente las asimetrías de poder y las desigualdades estructurales entre los estados, así como por su insuficiencia para explicar la influencia de los estados soberanos en la configuración de la política y la economía globales, especialmente en el contexto de los desafíos climáticos (Newell & Paterson, 2010). Además, se argumenta que el liberalismo minimiza el impacto de la política y los conflictos de intereses de las grandes potencias en las relaciones internacionales, lo cual es particularmente relevante en el ámbito del cambio climático.

A pesar de estas críticas, los intereses deben jugar un rol fundamental para que los PD tengan motivaciones para financiar la acción climática, con el fin de fomentar intereses compartidos que promuevan la paz y la armonía global. Este enfoque es coherente con la

necesidad de adaptación al cambio climático, que puede implicar transformaciones radicales y sistemáticas en las economías, sociedades y culturas a nivel mundial (Roberts & Parks, 2008).

Es completamente razonable suponer que los países más vulnerables al cambio climático deberían recibir financiamiento prioritario para invertir en acciones climáticas. Ahora bien, los mecanismos internacionales existentes varían según las contribuciones de los países donantes y dependen de causas complejas (Klein & Möhner, 2011). Una de las razones hace referencia a las necesidades del receptor, donde los países donantes se guían por un deseo caritativo de lograr una distribución más "justa" de la riqueza y, por lo tanto, brindar apoyo y financiamiento a las SIDS. Mientras que existe otra razón relevante a los intereses de los donantes o la política exterior, donde los donantes utilizan la ayuda como una herramienta para promover sus propios intereses económicos y políticos (Okereke & Coventry, 2016).

I.1 Cooperación Internacional

Para vincular la teoría del liberalismo en las relaciones internacionales climáticas con el financiamiento climático para las SIDS, se debe destacar la necesidad de la cooperación internacional debido a las limitaciones financieras y técnicas de estas naciones para abordar los desafíos del cambio climático por sí solas. En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los recursos destinados a objetivos climáticos sean suficientes. Buchner et al. (2019) argumentan que es crucial que la información sobre financiamiento climático sea accesible y pública, abarcando las fuentes de financiamiento, la asignación de fondos y los resultados obtenidos.

Para lograr estos objetivos, se han implementado sistemas de monitoreo y reporte para seguir el gasto y evaluar el progreso hacia los objetivos climáticos. Esto incluye informes regulares por parte de los estados y entidades participantes, así como auditorías y evaluaciones independientes. Además, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante al supervisar estos procesos y proporcionar información y recomendaciones pertinentes (OCDE, 2021; CMNUCC, 2021).

El Acuerdo de París establece un marco de transparencia bajo el Artículo 13, centrado en el financiamiento climático, con el objetivo de orientar a las partes en el reporte de sus avances para cumplir con los compromisos financieros hacia los PED. Aunque este enfoque busca fortalecer la cooperación internacional, también se reconoce que el acuerdo contiene disposiciones no vinculantes, lo que ha generado debates sobre los compromisos y la falta de consenso (Ferreira, 2018). Además, se enfatiza la necesidad de que los PED reflejen sus acciones climáticas en sus NDC, en concordancia con los objetivos establecidos.

El soporte financiero en este marco de transparencia es crucial para alinear los flujos financieros con el desarrollo de bajas emisiones de carbono y resilientes al clima. El apoyo financiero a los PED es un compromiso central entre los países, consolidado con la adopción del Acuerdo de París (Winkler et al., 2017). Sin embargo, los recursos actuales son insuficientes para abordar el cambio climático, destacando la importancia de aumentar la transparencia para fomentar una mayor asignación de fondos (Motty & Ackom, 2019). La transparencia en los flujos financieros es una herramienta clave para generar confianza y facilitar el acceso al financiamiento climático para los países en desarrollo (Ferreira, 2018) y la implementación de un marco de transparencia fortalecido, como se propuso en el Acuerdo de París,. Esto permitiría una mejor rendición de cuentas y una mayor movilización de recursos financieros para alcanzar las metas climáticas (Thwaites et al., 2017). Ahora bien, la obligación exclusiva de los países desarrollados se aplica únicamente a la provisión de financiamiento climático según el artículo 9.1 del Acuerdo de París, el cual establece que los PD deberán proporcionar asistencia financiera a los PED con el objetivo de ayudarlos en sus esfuerzos para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Sin embargo, el artículo 9.2 fomenta a las otras Partes a "proporcionar o seguir proporcionando dicho apoyo de manera voluntaria", una formulación que estaba ausente en instrumentos legales anteriores y decisiones en el régimen climático. En cuanto a la movilización de financiamiento climático que surge de una amplia variedad de fuentes, instrumentos y canales, las Partes acordaron en el artículo 9.3 que este se trataría de "un esfuerzo global", aunque los PD se comprometieron a seguir liderando en este aspecto.

Desde una perspectiva legal, los PD tienen obligaciones colectivas exclusivas para proporcionar financiamiento con niveles bajos de precisión, dejando una amplia discreción a cada uno de ellos para decidir la cantidad, el momento y los canales que utilizarán para la provisión y movilización. Además, pueden definir la cantidad de financiamiento que destinarán a la mitigación y a la adaptación, aunque se espera que respeten un "equilibrio" que supone un 50% a cada propósito y que, actualmente, es un equilibrio que no se está cumpliendo ya que la mayoría del financiamiento a nivel global está siendo destinado hacia proyectos de mitigación (Buchner et al., 2021).

A pesar de las complejidades, el Acuerdo de París ha establecido un marco de transparencia para el apoyo financiero, contribuyendo a la implementación y cumplimiento de las obligaciones de financiamiento climático (Sun et al., 2022). Este Marco de Transparencia Mejorada (ETF, por sus siglas en inglés) establece requisitos más rigurosos para la rendición de cuentas y la presentación de informes de los países desarrollados sobre los flujos financieros

hacia los PED. Dicha estructura supone la facilitación del cumplimiento y la implementación de los compromisos financieros, ya que proporciona un sistema claro de monitoreo y reporte de acciones y apoyo financiero (Weikmans et al., 2021).

En cuanto a la solidez del marco, algunos autores han destacado que, si bien el ETF representa un avance significativo en la promoción de la transparencia, todavía existen desafíos y áreas de mejora para garantizar su plena efectividad (Streck et al., 2016). A pesar de estos desafíos, el marco tiene el potencial de impulsar una expansión en el número de donantes con el tiempo, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la movilización de recursos financieros suficientes para la acción climática en las SIDS y más allá (Sun et al., 2022). A mayor transparencia y el sistema de rendición de cuentas, se puede fomentar una mayor participación y compromiso no solo de los PD, sino también de actores no estatales como el sector privado y otras partes interesadas (Weikmans et al., 2021).

I.2 Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas

En el contexto del financiamiento climático para las SIDS de las Antillas Menores del Caribe durante el período 2016-2020, el principio CBDR adquiere una relevancia particular. Este principio, establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992 y formalizado en CMNUCC, subraya la obligación colectiva de los países en la mitigación del cambio climático, al tiempo que reconoce la necesidad de diferenciar las responsabilidades basadas en las capacidades y contribuciones históricas a las emisiones de GEI (UNFCCC, 1992).

Este marco conceptual es crucial para entender el financiamiento climático dirigido a las SIDS, regiones que, aunque contribuyen mínimamente a las emisiones globales de GEI, enfrentan vulnerabilidades desproporcionadas debido a su geografía, economía y capacidad técnica limitada. El principio CBDR subraya que los PD tienen la obligación de proporcionar asistencia financiera y técnica a los PED (y por ende, a las SIDS) para fortalecer sus capacidades en proyectos de adaptación al cambio climático y reducción de emisiones, reconociendo la mayor responsabilidad histórica de los países industrializados en la crisis climática (Naciones Unidas, 2015).

Antes del Acuerdo de París, las SIDS, bajo el Protocolo de Kioto, no estaban obligadas a realizar compromisos de reducción de emisiones. Sin embargo, con la adopción del Acuerdo de París, este paradigma cambió, introduciendo la necesidad de que todas las partes, incluidas las SIDS, desarrollen y presenten NDC para describir sus esfuerzos y compromisos en la reducción de emisiones, vulnerabilidad y adaptación a sus realidades y capacidades

nacionales. Este cambio marcó un paso significativo hacia la inclusión y la acción global, reafirmando al mismo tiempo el principio CBDR en un contexto renovado, justo y más ambicioso de lucha contra el cambio climático (Morales, 2016). A pesar de la universalidad del Acuerdo de París, el principio CBDR sigue siendo esencial para abordar la justicia climática, proporcionando un marco que busca equilibrar la equidad con la efectividad en la acción climática. Al mismo tiempo, es imperativo resaltar la importancia del financiamiento climático en las SIDS para fomentar la cooperación internacional y cumplir con los objetivos de justicia climática que el principio CBDR intenta promover. En este sentido, la cooperación internacional y el financiamiento climático se convierten en herramientas indispensables para apoyar a las SIDS en sus esfuerzos de mitigación y adaptación, permitiéndoles contribuir a la lucha global contra el cambio climático desde sus propias capacidades y circunstancias, aunque sus emisiones sean insignificantes. Dicha lucha se refleja mediante la implementación de políticas innovadoras de adaptación y mitigación, como la transición hacia energías renovables, a pesar de sus bajas emisiones (Sun et al., 2022). Además las SIDS, a través de sus representantes, son actores clave en los foros internacionales, promoviendo la justicia climática y abogando por medidas equitativas en negociaciones como el Acuerdo de París (Streck et al., 2016). Mientras que, a nivel local, fomentan prácticas sostenibles y resiliencia frente a los impactos climáticos, sirviendo de ejemplo para otras regiones (Weikmans et al., 2021). Asimismo, contribuyen a la mitigación mediante la protección de ecosistemas marinos y costeros esenciales para la absorción de carbono, como los manglares y los arrecifes de coral (Sun et al., 2022).

I.3 Metodología

Para analizar el alineamiento del financiamiento climático con las NDC de las islas de las Antillas Menores del Caribe durante el período 2016-2020, se adoptó una metodología integral que incorpora un ejercicio de contabilización del financiamiento climático. Dicho ejercicio consiste en identificar y analizar el flujo de recursos económicos destinados a la implementación de estrategias, proyectos y acciones orientadas a la mitigación y adaptación del cambio climático.

Entre las fuentes que se utilizaron para realizar la contabilización del financiamiento climático, se utilizaron las páginas web de cada una de los fondos internacionales multilaterales (Fondo Verde para el Clima, Fondo de Adaptación, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Inversión Climática), bancos multilaterales (Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco Mundial), los reportes bienales actualizados de los países investigados, la organización de seguros climáticos del Caribe representada en el Caribbean Catastrophe Risk Insurance

Facility y la plataforma del Sistema de Información de Créditos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el cual detalla la información de los países donantes que asisten a las SIDS a través de acuerdos bilaterales. Sin embargo, es importante mencionar que en la búsqueda se encontraron algunas dificultades relacionadas con la ausencia de los nombres de los proyectos que fueron financiados y una falta de claridad sobre cómo se invirtieron algunos recursos financieros de manera concreta. Esta situación se debe, en gran medida, a la complejidad y diversidad de fuentes de financiamiento, así como a los diferentes criterios utilizados para definir y medir el financiamiento climático. Estudios previos han señalado que la falta de transparencia y coherencia en la asignación de fondos es un desafío recurrente en el financiamiento climático, debido a la multiplicidad de actores y fuentes involucradas (Nakhoda et al., 2016).

Además, se realizó una revisión bibliográfica sobre el financiamiento climático en la región caribeña, complementada con un análisis del Acuerdo de París y sus requisitos de transparencia y movilización de recursos financieros. Este análisis busca entender cómo estos mecanismos contribuyen a la asistencia y cooperación internacional en la materia.

Para enriquecer la investigación con perspectivas cualitativas, se llevaron a cabo entrevistas a expertos en financiamiento climático de las Antillas Menores. Estas conversaciones se centraron en las experiencias relacionadas con el acceso a financiamiento climático y la implementación de proyectos alineados con las NDC (ver Anexo 1). Si bien varios de los entrevistados accedieron a ser identificados y debidamente citados como referencia, otros no confirmaron la posibilidad de ser citados. Dichos expertos son identificados como “actores claves” a través de la investigación.

La combinación de técnicas cualitativas (revisión bibliográfica y entrevistas) y cuantitativas (contabilización del financiamiento climático) constituye una metodología mixta que proporciona una comprensión holística de la dinámica del financiamiento climático en relación con las NDC en las Antillas Menores del Caribe. Este enfoque mixto permite no solo capturar la magnitud y el flujo de los recursos financieros, sino también comprender las percepciones, experiencias y desafíos enfrentados por los actores clave en el terreno.

I.4 Estado del Arte

Para fines de investigación, se adoptó la definición presentada por el Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC, que describe el financiamiento climático como “el financiamiento relacionado con la reducción de las emisiones de GEI, así como con el propósito

de reducir la vulnerabilidad para mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales ante los impactos negativos del cambio climático” (UNFCCC, 2014).

Reconociendo que el objetivo del financiamiento climático es apoyar a los PED para tomar medidas contra el cambio climático y cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París (Iacobuță et al., 2022), se enmarca la necesidad de alinear los flujos financieros con un desarrollo de bajas emisiones y resiliente al cambio climático, tal como se establece en el artículo 2.1(c) del Acuerdo de París (Cochran & Pauthier, 2019) ya que la provisión de fondos permite implementar proyectos y programas centrados tanto en la mitigación como en la adaptación, asegurando un enfoque de desarrollo sostenible a largo plazo (Matemilola et al., 2020).

Ahora bien, la evolución del financiamiento climático desde la creación de la CMNUCC ha sido marcada por una creciente conciencia sobre la necesidad de movilizar recursos financieros significativos para combatir el cambio climático, especialmente en lo que respecta a la reducción de emisiones y la adaptación a sus impactos, particularmente en regiones altamente vulnerables como el Caribe. Este proceso ha involucrado tanto a PD, en su papel de donantes, como a PED, en su papel de receptores y responsables de implementar las medidas necesarias para hacer un uso práctico de dichos recursos. La CMNUCC ha jugado un rol central en el establecimiento de obligaciones para los PD para financiar esfuerzos de mitigación y adaptación en PED, marcando un hito en las negociaciones internacionales sobre cambio climático y estableciendo la creación de diversos fondos para el financiamiento climático. A lo largo de los años, diversas conferencias de las partes han servido como plataformas para avanzar en la discusión y concreción de compromisos financieros. Por ejemplo, según Alayza (2023), el objetivo de US\$100.000.000 por año, inicialmente establecido para 2020, se extendió hasta 2025. A partir de la COP29 en 2024, se adoptará un nuevo objetivo financiero colectivo que partirá de un piso de US\$100.000.000 anuales, tomando en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.

Dicho esto, el financiamiento climático en las SIDS ha sido estudiado anteriormente. El Stockholm Environment Institute (2018) realizó un análisis sobre los flujos de financiamiento climático hacia las SIDS del Caribe, utilizando datos del Sistema de Información de Créditos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. El mismo reveló que, entre 2010 y 2015, se comprometieron alrededor de US\$1.477.000.000 en financiamiento climático para las SIDS caribeñas, lo que representa aproximadamente el 6% del total de la ayuda reportada a la región del Caribe. La mayoría de estos fondos (62%) se proporcionaron como subvenciones, y aproximadamente el 48% del financiamiento climático se destinó a actividades de mitigación, el

32% a adaptación, y el 20% a iniciativas transversales. La mayoría del financiamiento provino de fuentes bilaterales (85%), y el sector que recibió la mayor parte del financiamiento climático fue la "protección general del medio ambiente". El análisis también destaca desafíos en la alineación del financiamiento climático con prioridades de desarrollo complementarias y en la distribución de los desembolsos. La investigación puede reflejar y concluir cuán suficiente ha sido el financiamiento climático recibido durante un periodo previo al Acuerdo de París aunque no utiliza las NDC como indicador para medir si los recursos financieros están alineados con los objetivos establecidos en cada país.

Por otro lado, Mohan (2023a) destaca la vulnerabilidad única de estas islas al cambio climático y la necesidad crítica de financiamiento internacional debido a limitaciones domésticas. Aborda diversas fuentes de financiamiento climático potencialmente no explotadas, como el financiamiento basado en el uso de la tierra y los bosques, en el océano, la inclusión de aspectos de género para atraer financiamiento, el papel del sector privado y la importancia del Fondo de Daños y Pérdidas establecido en la COP27. Estos enfoques representan oportunidades para que las SIDS caribeñas accedan a recursos financieros adicionales y diversificados para sus estrategias de cambio climático. Si bien Mohan examina una gama de estrategias y fuentes potenciales de financiamiento climático a nivel regional para las SIDS del Caribe, enfatizando la necesidad de diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento climático, es importante evaluar la suficiencia y el alineamiento del financiamiento climático existente, a través de las fuentes e instrumentos tradicionales, con las metas y compromisos específicos para así considerar cuán necesario es comenzar a tomar en consideración otras fuentes para la movilización de recursos financieros climáticos.

Asimismo, Mohan (2023b) analiza las estrategias y desafíos del financiamiento climático para las SIDS en el Caribe, en relación con sus primeras NDC. Este análisis proporciona una perspectiva crítica sobre cómo estas SIDS pueden mejorar la captación y utilización de financiamiento climático para cumplir con sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Se destaca la importancia de una planificación y ejecución eficaz para cerrar las brechas entre las necesidades de financiamiento y los recursos disponibles, asegurando así que las iniciativas de mitigación y adaptación sean sostenibles.

Ahora bien, mientras que Mohan proporciona una evaluación regional amplia, abarcando las necesidades de financiamiento climático de 16 SIDS, esta investigación busca realizar un análisis más detallado y específico entre tres países, contribuyendo con un entendimiento más profundo y puntual sobre el alineamiento del financiamiento climático recibido con las estrategias y compromisos climáticos nacionales en un contexto caribeño

seleccionado, para realizar un análisis sobre la suficiencia y la dirección del financiamiento climático en la región del Caribe.

I.5 Selección de los casos de estudio: Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía

Para efectos de la investigación, se seleccionaron tres islas: Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía. Estas naciones son parte de un conjunto de 47 países y territorios identificados por las Naciones Unidas desde 1992 como SIDS, caracterizadas por su limitada extensión territorial y su ubicación rodeada de mares (ONU, 1992). Esta clasificación responde a la particular vulnerabilidad de estos territorios frente a los adversos efectos del cambio climático, tales como el ascenso del nivel del mar, el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y la erosión de arrecifes de coral, factores que imponen significativos riesgos a los sectores económicos y sociales de estas sociedades.

Ahora bien, principalmente se debe destacar que estas tres naciones han realizado estimaciones de los costos necesarios para alcanzar las metas propuestas en sus NDC, las cuales incluyen objetivos tanto condicionales como incondicionales a ser cumplidos para el año 2030. Es importante aclarar que los objetivos incondicionales son compromisos que un país se compromete a alcanzar por sus propios medios, sin depender de apoyo internacional. Estos objetivos suelen reflejar las acciones de mitigación y adaptación que un país puede llevar a cabo con sus propios recursos y capacidades (UNFCCC, 2015). Por ende, según Mohan (2023), las necesidades de financiamiento de las SIDS de la región del Caribe para implementar sus compromisos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático son significativas y requieren un apoyo financiero internacional continuo. Watson (2016) señala que el financiamiento climático es crucial para estas SIDS en su lucha contra el cambio climático y desarrollo sostenible, destacando el marco del principio CBDR entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo. Este análisis subraya la importancia crítica del financiamiento climático en apoyar a estas SIDS a cumplir con sus compromisos ambientales y de desarrollo sostenible, reconociendo las limitaciones y necesidades específicas de estas naciones frente a la magnitud global del desafío climático (Mohan, 2023). Además, los retos asociados al financiamiento multilateral de adaptación para estas SIDS son abordados por Kalaidjian y Robinson (2022), quienes destacan que la naturaleza y complejidad de dichos fondos subrayan la necesidad de una mayor coherencia en la asignación de recursos y la aplicación efectiva del principio CBDR.

Las estimaciones de costos realizadas por estos países han evidenciado la brecha entre el financiamiento climático necesario y los flujos reales de fondos, lo que sugiere una base sólida para investigar la coherencia entre las promesas y los flujos financieros reales.

La selección de estos tres países facilita la exploración de las dinámicas de cooperación regional e internacional en el contexto caribeño. El enfoque al que se refiere este estudio se centra en analizar la relación entre las iniciativas de financiamiento climático y los proyectos climáticos detallados en las NDC de Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía. Este enfoque específico permite examinar cómo los flujos de financiamiento climático se asignan en función de las necesidades y prioridades nacionales, lo que es crucial para entender si las inversiones realizadas tienen un impacto directo y suficiente en la implementación de los compromisos climáticos. Este enfoque es fundamental porque estas SIDS, debido a su vulnerabilidad particular al cambio climático y su limitada capacidad financiera, requieren un alineamiento estratégico de los recursos disponibles con sus prioridades nacionales (Iacobaș et al., 2022). La evaluación de cómo se distribuyen los fondos en relación con las NDC de estos países puede revelar si el financiamiento climático recibido es suficiente y está bien dirigido para abordar los desafíos identificados, asegurando así que los recursos financieros no se desperdicien y que se maximice su impacto. Además, un enfoque de análisis centrado en la alineación entre necesidades y flujos financieros puede ayudar a identificar brechas significativas y orientar futuras estrategias de financiamiento (Watson, 2016).

Por último, se espera que el presente estudio ofrezca la oportunidad de extraer lecciones valiosas para la formulación e implementación de políticas climáticas a nivel nacional y regional. La evaluación de la alineación entre el financiamiento recibido y las NDC puede revelar brechas y desafíos significativos, así como oportunidades para mejorar la eficacia de la acción climática.

II. Movilización de Recursos Financieros hacia las SIDS

La geografía de las SIDS plantea desafíos financieros adicionales debido a su aislamiento y dispersión, lo que incrementa los costos de importación de materiales y contratación de personal especializado, en comparación con otras regiones (Atteridge et al., 2018). Frente a estos desafíos, las islas presentan una capacidad financiera y técnica limitada, dependiendo considerablemente de la asistencia externa para sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de financiamiento climático público e internacional. Entre las principales fuentes de este financiamiento se encuentran organizaciones internacionales como el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés), así como apoyos bilaterales y multilaterales de países desarrollados y el sector privado (Scandurra et al., 2020)

El GCF es el primero a destacar debido a su papel central en proveer financiamiento para proyectos climáticos de países en desarrollo con el propósito de cumplir con las metas del Acuerdo de París. Este fondo otorga recursos tanto para mitigación, adaptación como proyectos transversales, en áreas como ecosistemas y servicios ecosistémicos; seguridad hídrica y alimentaria; infraestructura; medios de vida de poblaciones y comunidades; generación y acceso a energía; transporte; bosques y uso de suelo y edificios, ciudades, industrias y artefactos. Además, el GCF proporciona recursos financieros para la capacitación técnica necesaria para planificar y ejecutar proyectos relacionados con el clima (Bowman & Minas, 2019). Entre sus objetivos, el GCF busca fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los países en desarrollo, brindando apoyo para el desarrollo de proyectos, programas de formación y servicios de asesoramiento en la implementación de estrategias climáticas.

Por otro lado, el AF, como su nombre indica, financia proyectos de adaptación al cambio climático y proporciona recursos para asistencia técnica y capacitación. Este fondo apoya a los PED en la implementación de medidas de adaptación a través del financiamiento de actividades que mejoran la capacidad de resiliencia y reducen la vulnerabilidad al cambio climático (Schalatek & Bird, 2016), tales como proyectos de agricultura o manejo de sistemas costeros, entre otros. Asimismo, el AF brinda apoyo para la capacitación, educación y desarrollo de capacidades, así como servicios de asesoramiento y apoyo en la implementación de reformas normativas y reglamentarias.

Por otro lado, es importante destacar al GEF el cual no es un mecanismo exclusivo de la CMNUCC, sino que también ha sido establecido en otras convenciones como la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, entre otros. (Batra et al., 2022; Nyekwere, 2017). El GEF desempeña un rol importante en movilizar recursos financieros climáticos, especialmente al considerar su capacidad y experiencia para enfrentar los desafíos de los ecosistemas marinos y costeros compartidos. En este contexto, se hace referencia tanto a la capacidad técnica del GEF como a la de los países beneficiarios, quienes trabajan conjuntamente para implementar estrategias efectivas de conservación y adaptación (Scandurra et al., 2020).

Continuando con otros tipos de fuentes, se encuentran los bancos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, por sus siglas en inglés). Estos ofrecen recursos para financiamiento climático mediante una serie de mecanismos que incluyen préstamos, donaciones y garantías, para una amplia gama de proyectos y programas en las SIDS (Atteridge & Savvidou, 2017). Dicho esto, se reconoce que los bancos multilaterales de desarrollo tienen un gran potencial para liderar el ámbito del financiamiento climático, ya que tienen capital a su disposición y pueden recaudar dinero adicional a través de los mercados internacionales (Xie, Scholtens, & Homroy, 2023). Además, la influencia de estos no solo se manifiesta en su capacidad de financiamiento y movilización de recursos, sino también en su rol de establecer la agenda y prioridades de cambio climático a través de políticas, estándares y recomendaciones para proyectos de desarrollo sostenible (IISD, 2022).

Concretamente, el CDB se perfila como uno de los actores más importantes en la región, particularmente en términos de volumen de financiamiento otorgado para proyectos climáticos y desarrollo sostenible. El CDB ha logrado facilitar el acceso al financiamiento climático mediante la acreditación de proyectos que cumplen con criterios específicos de vulnerabilidad climática. Esto incluye tanto proyectos de desarrollo como aquellos enfocados específicamente en el cambio climático, ya sea en mitigación o adaptación. Para aclarar, un proyecto de desarrollo se enfoca en mejorar la infraestructura social o económica de un país, sin estar directamente relacionado con el cambio climático. Un ejemplo de ello es el Road Improvement and Maintenance Project en Santa Lucía, que tiene como objetivo modernizar y expandir la red vial del país para facilitar el transporte y el comercio, contribuyendo así al desarrollo económico (CDB, 2019). En contraste, un proyecto de cambio climático se concentra en abordar los desafíos relacionados con el cambio climático, ya sea mediante la reducción de emisiones de GEI o la mejora de la resiliencia

ante eventos climáticos extremos. Además, el CDB enfatiza el desarrollo de capacidades locales e institucionales para realizar evaluaciones de vulnerabilidad y diseñar proyectos climáticamente inteligentes, al mismo tiempo que busca fortalecer las alianzas con otros bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales para aumentar el financiamiento disponible para proyectos climáticos (Kalaidjian & Robinson, 2022). Dicho esto, no cabe dudas de que las estrategias adoptadas por el CDB, desde la integración de consideraciones climáticas en el ciclo de vida del proyecto hasta la colaboración regional e internacional, reflejan un enfoque comprensivo y pragmático hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación. Esta afirmación se basa en los informes y estrategias del CDB, que muestran un enfoque holístico para incorporar la resiliencia climática en proyectos de desarrollo (CDB, 2020). Cabe mencionar que otros bancos multilaterales de desarrollo, como el BID y el BM, también cuentan con políticas y programas especiales para priorizar a los países clasificados como C y D (en el caso del BID) y a los SIDS (en el caso del BM), lo que destaca su compromiso con el financiamiento climático para regiones vulnerables (BID, 2021; BM, 2021). Las alianzas del banco regional con el BID y el BM han facilitado una movilización de recursos financieros de manera más efectiva para proyectos climáticos resilientes en el Caribe (Gibbs, entrevista virtual, 2023). Además, el CDB ha combinado préstamos concesionales con donaciones para financiar infraestructura resiliente, lo cual ha sido fundamental para apoyar a países como Antigua y Barbuda.

En relación al BM, este se encuentra en un proceso de evolución significativa que busca reformar su misión y sus modelos operativos y de financiamiento, con propuestas que incluyen la consideración de la vulnerabilidad al cambio climático como criterio de elegibilidad para acceder a financiamiento, así como la implementación de Cláusulas de Deuda Resiliente al Clima y herramientas de financiamiento de contingencia para responder ante desastres naturales. Estas iniciativas tienen el potencial de ofrecer un apoyo crucial a las SIDS, quienes son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático (Dimond, 2023).

Otra fuente para el financiamiento climático se representa a través del sector privado. Sin embargo, hay que mencionar que existen múltiples barreras que han impedido la movilización de financiamiento privado para abordar el cambio climático, esto incluye: la falta de incentivos cuantificables, la falta de disposición de la mayoría de las empresas con fines de lucro para internalizar las externalidades ambientales, bajos o intangibles retornos en las prácticas de responsabilidad social corporativa, percepciones de altos riesgos sobre las tecnologías bajas en carbono por parte de los bancos comerciales y otros financiadores tradicionales, una falta de coincidencia entre los períodos de retorno a largo plazo y los horizontes a corto plazo de la mayoría de los inversores privados, falta de información para

evaluar proyectos y sus consecuencias relacionadas con el clima, y la escasez de proyectos bancables de bajo carbono, adaptación y resiliencia (Chawla & Ghosh, 2019).

Por otro lado, los acuerdos bilaterales son otra fuente de financiamiento climático y una de las más utilizadas entre los países desarrollados y estas SIDS. Estos acuerdos se establecen entre dos países y tienen como objetivo promover la cooperación y el apoyo para abordar los desafíos del cambio climático. A través de estos acuerdos, los países desarrollados suelen brindar asistencia financiera y transferencia de tecnología a las SIDS, ayudando a desarrollar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático (Robinson, 2018). Asimismo, se fomenta la colaboración, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades, que son fundamentales para implementar acciones climáticas efectivas.

Finalmente, cabe mencionar al Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés), que se compone de varios fondos cuyo financiamiento proviene de países donantes como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, y Japón, y es administrado por el BM. Entre los principales programas de financiamiento del CIF se encuentran el Fondo de Tecnología Limpia (CTF), el Fondo Estratégico para el Clima (SCF), y el Programa de Resiliencia Climática (PCR, por sus siglas en inglés). El CIF tiene un largo historial de trabajo con estas SIDS, entendiendo que estas presentan una necesidad urgente de inversión para fortalecer sus capacidades, estrategias de adaptación y resiliencia al cambio climático (Kalaidjian & Robinson, 2022). Por ende, el CIF ha trabajado con estas naciones para ayudarlas a adaptarse e implementar acciones climáticas impactantes a través de financiamiento climático concesional. Este tipo de financiamiento asegura que los fondos lleguen a las comunidades vulnerables mediante un enfoque programático centrado en la coordinación, simplificación de procedimientos, y alineación con las prioridades nacionales de desarrollo (Atteridge & Canales, 2017).

II.1 Instrumentos de Financiamiento Climático

El financiamiento climático puede llegar a un país de diferentes formas, con implicaciones y condiciones sobre cómo se puede utilizar el dinero, quién controla su uso, cuánto llega a los beneficiarios previstos y cómo se ve afectado el presupuesto del país receptor. Dicho esto, los instrumentos de financiamiento climático se refieren a diversos mecanismos y herramientas que se utilizan para movilizar y asignar recursos financieros para actividades relacionadas con el cambio climático. Estos instrumentos están diseñados para respaldar tanto los esfuerzos de mitigación como los de adaptación, al proporcionar financiamiento para proyectos e iniciativas que buscan reducir las emisiones de GEI y aumentar la resiliencia ante los impactos climáticos (CMNUCC, 2015). Ahora bien, los

instrumentos de financiamiento climático se pueden dividir en dos categorías: los tradicionales y los novedosos.

Los instrumentos tradicionales de financiamiento climático y los instrumentos novedosos de financiamiento climático difieren en sus enfoques para movilizar y asignar recursos financieros para la mitigación y adaptación al cambio climático. Por un lado, los instrumentos tradicionales suelen representarse a través de donaciones, préstamos concesionales, garantías e inversiones de capital y, generalmente, son proporcionados por gobiernos y organizaciones internacionales quienes suelen establecer condiciones de elegibilidad para acceder a ellos.

Mientras que los instrumentos novedosos de financiamiento climático son mecanismos innovadores que buscan diversificar y aumentar la disponibilidad de financiamiento climático. Estos instrumentos incluyen la emisión de bonos verdes, seguros climáticos, participación en el mercado de carbono y fondos nacionales. Es importante reconocer que existe una mayor participación del sector privado, donde buscan aprovechar el capital privado con el fin de promover enfoques basados en el mercado para el financiamiento climático.

Dicho esto, cabe la posibilidad de que los instrumentos de financiamiento climático no sean utilizados de manera aislada. Existen situaciones en las que se utilizan varios instrumentos debido a la presencia de diversas barreras financieras y no financieras que dificultan la movilización de financiamiento, especialmente del sector privado, para abordar el cambio climático (Jaffe et al., 2005). Por ende, no existe una fórmula o una receta perfecta que responda a los problemas que se pueden enfrentar en la movilización de recursos financieros para propósitos climáticos ya que estos siempre va a depender de la situación y los criterios establecidos en cada proyecto. Cada instrumento tiene sus fortalezas y debilidades.

II.1.a Instrumentos Tradicionales

En la movilización de recursos para el financiamiento climático, es esencial distinguir entre los instrumentos tradicionales a las donaciones como uno de los principales mecanismos empleados. Las donaciones, definidas como transferencias financieras no reembolsables condicionadas a altos niveles de transparencia, representan una fuente vital de apoyo para proyectos climáticos en las SIDS (UNFCCC, 2020). Este apoyo puede ser puntual o continuado, siendo especialmente crítico dadas las restricciones financieras que enfrentan estas SIDS para combatir los efectos del cambio climático.

Por otra parte, los préstamos concesionales, ofrecidos a tasas inferiores a las del mercado, emergen como una alternativa significativa para financiar esfuerzos de mitigación y adaptación (ICLEI América do Sul, 2021). A pesar de su atractivo por sus condiciones

favorables, es crucial reconocer que siguen siendo obligaciones financieras que requieren reembolso. Su uso debería, por tanto, complementarse con otros instrumentos financieros, incluidas las donaciones y garantías, para formar una estrategia financiera robusta para estas SIDS en su lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, las garantías constituyen otro instrumento relevante, actuando como seguridades financieras para incentivar la inversión privada en proyectos climáticos a través de acuerdos en virtud de los cuales un garante se compromete a cumplir con las obligaciones asumidas por un prestatario frente a un prestamista en el marco de actividades relacionadas con el cambio climático (Iberdrola, s. f.) . Sin embargo, críticos como Gabor (2021) señalan que este enfoque de “*derisking*” puede desviar el riesgo financiero del sector privado al público, lo que potencialmente beneficia más a los inversores que a los objetivos climáticos. Este mecanismo podría, según Gabor, generar una dependencia del financiamiento privado, limitando la soberanía de los PED en la definición de sus agendas climáticas.

Adicionalmente, las inversiones de capital se presentan como una opción valiosa, implicando la adquisición de participaciones en empresas o proyectos con potencial de beneficios financieros. Aunque atractivas para el sector privado, estas inversiones llevan inherentes riesgos regulatorios y de ejecución (OCDE, 2021).

En conjunto, la eficacia de estos instrumentos de financiamiento climático radica en su implementación coordinada y adaptada a las necesidades específicas de estas SIDS, considerando tanto las ventajas como los desafíos asociados a cada mecanismo.

II.1.b Instrumentos Novedosos

Pasando a los instrumentos novedosos para el financiamiento climático, debemos comenzar reconociendo a uno de los más utilizados e implementados en la región caribeña: los seguros climáticos. Los seguros climáticos son una herramienta que provee protección financiera en caso de eventos climáticos extremos, tales como inundaciones y huracanes, y pueden ayudar a países vulnerables a recuperarse de desastres relacionados con el clima (BM, 2017). Su propósito es mitigar las pérdidas financieras y los problemas económicos que pueden resultar de eventos climáticos extremos, como huracanes, inundaciones y sequías, y otros riesgos relacionados con el clima, como el aumento del nivel del mar y la desertificación.

En el caso de estas SIDS, el seguro climático puede ser una fuente importante de financiamiento para actividades de adaptación al cambio climático y el fomento de la resiliencia. Sin embargo, es necesario analizar si los seguros son financiados por donantes o sostenidos por

los mismos países y poblaciones a través de primas. Por ejemplo, el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) combina contribuciones de donantes y primas pagadas por los gobiernos participantes para proveer seguros contra desastres (Hagenlocher et al., 2020). El componente de financiamiento del CCRIF incluye donaciones iniciales de organismos internacionales y préstamos concesionales, lo que facilita el acceso a los seguros climáticos a estas SIDS, permitiendo una red de seguridad financiera ante riesgos climáticos. Adicionalmente, en los seguros paramétricos ofrecidos por el CCRIF, el pago de las primas se basa en modelos de riesgo que anticipan eventos climáticos, proporcionando desembolsos rápidos tras desastres (Martínez-Díaz et al., 2019).

El CCRIF tiene un enfoque programático que se centra en brindar un acceso más asequible a seguros climáticos, permitiendo que los gobiernos puedan hacer frente a los riesgos financieros de los desastres climáticos sin tener que sostener la carga total de las primas. Aunque estos seguros pueden considerarse instrumentos de transferencia y socialización de riesgos, su componente de donación inicial y su estructura concesional de financiamiento lo vinculan con el financiamiento climático, ya que buscan facilitar la resiliencia y la adaptación en contextos de alta vulnerabilidad. Esto es crucial ya que las poblaciones de menores ingresos y las más afectadas por los desastres climáticos suelen tener una capacidad limitada para pagar primas elevadas, lo que puede dejarlas desprotegidas ante eventos extremos. Además, garantizar el acceso a seguros asequibles puede mejorar la resiliencia y la capacidad de recuperación de estas poblaciones frente a los impactos del cambio climático" (Surminski & Oramas-Dorta, 2014).

Por otro lado, se encuentran los bonos verdes. Estos son utilizados para apoyar y promover proyectos sostenibles relacionados con el cambio climático y suelen ser emitidos por entidades gubernamentales, corporaciones y organizaciones. Los ingresos generados se destinan específicamente a proyectos que cumplen con criterios ambientales y han sido certificados como tales (Carlino, 2015). Aunque se ha sugerido que los bonos verdes tienen un precio más alto que los bonos tradicionales, la realidad es que estos bonos tienden a tener una prima verde, lo que significa que los inversores pueden aceptar un menor rendimiento por adquirirlos debido a su impacto positivo en el medio ambiente y su menor riesgo (MacAskill et al., 2021). En este contexto, el surgimiento de las taxonomías verdes, sostenibles y sociales ha sido fundamental para definir qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles. Estas taxonomías proporcionan un marco claro para guiar a los emisores e inversores sobre las características de los proyectos que pueden recibir financiamiento a través de bonos verdes o sostenibles. Por ejemplo, la Taxonomía Verde de la Unión Europea ha servido

de referencia para muchas otras regiones, estableciendo criterios rigurosos para la financiación de actividades que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático. Según el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la creación de taxonomías nacionales y regionales es clave para asegurar la integridad de los mercados de bonos verdes y sostenibles, garantizando que los recursos se utilicen de manera efectiva para proyectos de impacto positivo en el clima.

Los estudios han mostrado que esta prima verde varía según el emisor y el mercado; por ejemplo, los bonos verdes emitidos por instituciones financieras suelen tener un rendimiento ligeramente menor que los bonos tradicionales comparables, lo que indica una preferencia de los inversores por los bonos verdes y su demanda sostenida (Fatica et al., 2021). La prima verde, aunque no siempre representa un precio mucho más alto en sí misma, está relacionada con la alta demanda y la percepción de sostenibilidad y responsabilidad social de estos bonos (Kumar, 2022). Además, el costo de emisión para el emisor puede ser mayor debido a la necesidad de cumplir con los estándares de certificación y la transparencia requerida para etiquetar el bono como 'verde'.

Ahora bien, a pesar de la importancia que representan los bonos verdes y cómo estos han emergido como un mecanismo viable para financiar proyectos de infraestructura resiliente, la falta de familiaridad con estos instrumentos limita su adopción en las SIDS, especialmente las de las Antillas Menores (actor clave, entrevista virtual, 2023).

Otro instrumento de financiamiento climático novedoso se encuentra en los microcréditos. Estos se describen como préstamos pequeños otorgados a individuos, pequeñas empresas o comunidades para invertir en medidas de mitigación o adaptación al cambio climático. Estos son ofrecidos por instituciones de microfinanciamiento y otras organizaciones especializadas en la prestación de servicios financieros a personas y comunidades de bajos ingresos. Es importante mencionar que suelen tener tipos de interés bajos y condiciones de reembolso flexibles para asegurar su accesibilidad a aquellos que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales. Estos fondos representan una fuente importante de financiamiento para proyectos relacionados con el cambio climático en las SIDS, ya que brindan a las personas y comunidades rurales la oportunidad de acceder al capital necesario para implementar prácticas y tecnologías sostenibles, especialmente en el sector agrícola (actor clave, entrevista virtual, 2023). Sin embargo, también presentan desafíos importantes, como la dificultad de verificar el impacto y la efectividad de las inversiones realizadas. La falta de mecanismos de seguimiento y evaluación robustos puede llevar a que el uso de estos

fondos no se traduzca en resultados tangibles de mitigación o adaptación climática (Linnerooth-Bayer & Mechler, 2009).

Continuando, es imprescindible destacar a los fondos nacionales. Estos son fondos establecidos a nivel nacional por los gobiernos con el fin apoyar la implementación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en sus respectivos países. La fuente de financiamiento de estos fondos puede ser diversa e incluye recursos gubernamentales, aportes de donantes y recursos de fondos internacionales. Es importante destacar que los fondos nacionales pueden ser utilizados como una herramienta para acceder a fuentes adicionales de financiamiento climático a nivel internacional, como lo es el GCF, por ejemplo.

Finalmente, se debe mencionar a los mercados de carbono. Estos son una forma de incentivar la reducción de emisiones de GEI mediante la compra y venta de créditos de carbono (PNUD, 2015). Los gobiernos establecen mercados de cumplimiento para ejecutar sus obligaciones reglamentarias en virtud de acuerdos internacionales sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París. Estos mercados pueden adoptar diferentes formas, como sistemas de “*cap and trade*” e impuestos sobre el carbono. Los sistemas de “*cap and trade*” establecen un límite sobre la cantidad total de emisiones de GEI que pueden ser liberadas por las entidades cubiertas con el fin de emitir derechos de emisión o créditos que pueden ser comercializados entre los participantes. Mientras que los impuestos sobre el carbono se imponen directamente sobre las emisiones de GEI, estos mercados podrían proporcionar una fuente de ingresos para los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en estas SIDS, ya que las entidades podrían optar por adquirir créditos de proyectos que generan reducciones de emisiones en estos países. Es común que estas SIDS establezcan en sus respectivas NDC sus intenciones de implementar el uso de mecanismos basados en el mercado con el objetivo de alcanzar sus metas relacionadas a las emisiones de GEI como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los “*offsets*”, aunque hasta la fecha no han implementado dichos mecanismos. De todas formas, se debe reconocer que, tomando en consideración la pequeña escala que representan los países del Caribe, junto a sus complejidades políticas, hay razones suficientes para ser escépticos sobre la eficacia de nuevas iniciativas financieras como lo representa el mercado de carbono, ya que estas iniciativas se centran principalmente en la mitigación de emisiones y no en la adaptación a los impactos del cambio climático. No obstante, explorar nuevos mecanismos de financiamiento y modelos de cooperación regional sigue siendo imprescindible para superar las barreras financieras y técnicas existentes.

II.2 Alineamiento del financiamiento climático con las NDC

La importancia del alineamiento entre la movilización de recursos financieros y las NDC nace de la necesidad que tienen estas SIDS de alcanzar sus respectivas metas y objetivos, que se sintetizan en reducir las vulnerabilidades frente a los impactos climáticos. Este alineamiento es fundamental para garantizar que los fondos sean suficientes en los sectores clave para la mitigación y adaptación al cambio climático, lo que permite un desarrollo sostenible a largo plazo (Iacobuță et al., 2022). Además, la alineación estratégica de los flujos financieros con las prioridades sectoriales y nacionales establecidas en las NDC facilita la planificación, implementación y monitoreo de acciones climáticas que maximicen el impacto y garanticen la resiliencia de los países más vulnerables (Northrop et al., 2016).

Por otro lado, el análisis de la alineación entre financiamiento y NDC permite identificar brechas en el financiamiento y en la implementación de proyectos de adaptación y mitigación, asegurando que los recursos lleguen a los sectores donde más se necesitan, como energía, agricultura y agua, que son críticos para la sostenibilidad y la resiliencia en las SIDS (Saunders, 2019).

Ahora bien, el desalineamiento entre los fondos y las NDC es un problema que puede surgir por diferentes razones como lo pueden ser: la insuficiencia de fondos, desajustes en la asignación de los fondos, criterios de financiamiento restrictivos, cambios en las prioridades políticas y económicas, y barreras técnicas y administrativas. Las barreras relacionadas con la capacidad administrativa representan el principal desafío para acceder al financiamiento climático, ya que dificultan el cumplimiento de los estrictos requisitos establecidos por los países donantes (Canales, 2023, entrevista virtual). Además, se podría dar el caso donde el financiamiento sea entregado a través de intermediarios y este se pueda quedar sesgado hacia sectores en los cuales estos intermediarios tienen más experiencia o poder de convocatoria. También cabe la posibilidad de que algunos de los fondos climáticos no estén operando con suficiente flexibilidad como para permitir que los países financien sus prioridades más importantes cuando estas se encuentran en sectores que normalmente no se consideran "sectores climáticos". Al hacerlo, los fondos están creando una separación artificial entre "inversiones climáticas" e "inversiones para el desarrollo" que no coinciden con la realidad (Mohan, 2022).

Estos problemas mencionados se pueden dar como producto de la complejidad que existe en la arquitectura del financiamiento climático y la falta de armonización entre los requisitos de los fondos multilaterales y los países donantes. Asimismo, atraer financiamiento

para proyectos pequeños pero de alto impacto sigue siendo un desafío, lo cual respalda la necesidad de modificar las estructuras de financiamiento para valorar más los proyectos de bajo costo pero con gran impacto en estas SIDS (actor clave, entrevista virtual, 2023). Además, se debe mencionar que muchos de los problemas y desafíos que enfrentan estas SIDS son poco comprendidos a nivel internacional y esto se ve agravado por el hecho de que tampoco tienen una voz fuerte en la toma de decisiones en las principales instituciones financieras internacionales (Hart, 2013).

Habiendo dicho esto, también se puede argumentar que la forma en la que se está movilizando el financiamiento climático actualmente, dificulta la posibilidad de que los gobiernos tengan una visión integral de lo que está sucediendo. Por ende, para tener una mejor perspectiva del financiamiento que se está proporcionando, también sería necesario centrar las discusiones en la calidad de las inversiones que se están realizando. Esto debe incluir preguntas sobre qué tan bien se alinea el financiamiento recibido con las necesidades y prioridades que los diferentes países han estipulado en sus NDC, así como qué tipo de resultados tangibles se están produciendo. Por lo tanto, se necesita más conocimiento sobre quién se beneficia, cómo, qué tipo de cambio se está alcanzando y cuán sostenible es a lo largo del tiempo. Si los proyectos locales no se alinean con las prioridades internacionales, estas SIDS seguirán enfrentando grandes dificultades para recibir apoyo financiero sustancial (Canales, 2023, entrevista virtual).

Otro punto para destacar es el tema de las acreditaciones para acceder a financiamiento, en especial de fondos climáticos como el GCF o el AF. La acreditación de agencias nacionales o incluso regionales para acceder a fondos de financiamiento climático de forma directa representa un paso vital para que estos países insulares avancen en sus esfuerzos de adaptación y mitigación. Sin embargo, el proceso de acreditación es complejo y requiere que se cumplan rigurosos criterios financieros, institucionales y ambientales, lo que puede representar un desafío, especialmente para naciones u organizaciones con recursos limitados. Además, la efectividad en el uso de estos fondos depende de la capacidad de las agencias acreditadas para desarrollar y ejecutar proyectos que aborden de manera prudente las necesidades y prioridades nacionales en cuanto al cambio climático (actor clave, entrevista virtual, 2023). Además, se destaca que la falta de datos actualizados sobre la población y los grupos vulnerables constituye un desafío para desarrollar proyectos que respondan efectivamente a las necesidades locales. Sin embargo, es igualmente crucial que los gobiernos incorporen estas prioridades en sus políticas nacionales y procesos de planificación, ya que su liderazgo y compromiso son fundamentales para implementar proyectos climáticos y asegurar

que los fondos sean suficientes para que se utilicen en coherencia con los objetivos nacionales (actor clave, entrevista virtual, 2023). Dicho esto, se debe mencionar que la importancia de las acreditaciones se ven representadas en el acceso al financiamiento de manera directa, el fortalecimiento institucional, la promoción de la transparencia y gobernanza y el empoderamiento local. Ahora bien, tomando en consideración la posibilidad de que algunas de estas SIDS no puedan lograr la acreditación de agencias nacionales para acceder al financiamiento climático, como mínimo, debe existir un marco regional que facilite la coordinación y estandarice los procedimientos y aumentar significativamente la capacidad de estas SIDS para acceder a fondos internacionales (Canales, 2024, entrevista virtual).

En este sentido, una organización regional acreditada al GCF que ha promovido la cooperación regional en el Caribe y que, de alguna manera, ha promovido el alineamiento del financiamiento climático con las NDC establecidas en los respectivos países caribeños es el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (5Cs). La organización ha logrado avances importantes en la modelación climática, mejorando la precisión de las proyecciones hasta el nivel de cuencas hidrográficas específicas. Además, ha liderado proyectos de adaptación en sectores clave como el agua, la salud, la agricultura y la infraestructura costera. En este sentido, 5Cs ha funcionado como un mandato para coordinar la respuesta del Caribe al cambio climático, proporcionando una base científica para la toma de decisiones y la planificación de la adaptación. Al mismo tiempo, el 5Cs ha mantenido una autosuficiencia financiera, evitando la dependencia exclusiva de subvenciones gubernamentales (Trotz, entrevista virtual, 2023). Además, es importante destacar que recauda fondos principalmente a través de proyectos financiados por donantes internacionales, incluidos organismos multilaterales como el GCF, el AF y otras fuentes de financiamiento climático. Estos recursos se destinan a proyectos específicos relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático, asegurando así su sostenibilidad a largo plazo. Dicho esto, a pesar de enfrentar desafíos significativos, el 5Cs se destaca como un modelo de cómo la cooperación y la innovación pueden mejorar la resiliencia climática en el Caribe.

No cabe dudas de que estos países han asumido un rol activo en la gobernanza global del cambio climático, resaltando los retos y oportunidades específicos asociados al financiamiento climático. Se enfrentan a la desventaja de tener capacidades limitadas en sus gobiernos e instituciones para acceder directamente a los recursos necesarios que les permitan desarrollar e implementar proyectos de impacto significativo (Thomas et al., 2020). Por ello, una demanda primordial de estas naciones es el fortalecimiento de la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades humanas con el propósito de apoyar sus esfuerzos de adaptación

y mitigación. Asimismo, subrayan la importancia de establecer vínculos entre el cambio climático y el desarrollo, una conexión que cada vez más abarca aspectos tanto de sostenibilidad como de reducción de la pobreza (UNCTAD, 2021).

Dicho esto, es crucial subrayar la urgencia de mejorar el sistema financiero global para movilizar capital hacia una economía de desarrollo sostenible. Si bien las NDC son diseñadas principalmente para identificar y cuantificar prioridades climáticas nacionales, no son intrínsecamente *portfolios* de proyectos de inversión bancables, pero destacan la necesidad de desarrollar planes financieros que traduzcan las NDC en proyectos bancables y desarrollar estrategias financieras climáticas que puedan complementar las de los países y la implementación de las NDC. Además, la importancia de la transparencia y el seguimiento del financiamiento climático para una mayor responsabilidad y la afinación de las NDC también se resalta como un factor clave para mejorar el alineamiento y potencialmente permitir ajustes en las NDC (Chebly et. al., 2018).

III. Contribuciones Nacionales Determinadas establecidas en las Antillas Menores del Caribe

Las NDC se definen como los compromisos de reducción de emisiones asumidos por los países en el marco de la CMNUCC (UNFCCC, 2016). Dichos compromisos son parte fundamental del Acuerdo de París ya que, mediante ellos, cada Parte puede identificar las estrategias a implementar para reducir las emisiones de GEI al mismo tiempo que se compromete a llevar a cabo acciones relevantes a la adaptación al cambio climático.

Por esta razón, son vistos como herramientas clave en el esfuerzo global para enfrentar el cambio climático con el propósito de que proporcionen un marco para que los países trabajen juntos y puedan lograr los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Al mismo tiempo, sirven como herramienta de transparencia y rendición de cuentas tomando en consideración que las Partes están comprometidas a informar periódicamente el progreso para alcanzar sus respectivas metas estipuladas.

En el caso de las SIDS la decisión 1 de la Vigésima Conferencia de las Partes, se establece que: “las pequeñas islas en desarrollo pueden comunicar información sobre sus estrategias, planes y acciones para el desarrollo de bajas emisiones de GEI, reflejando de esta manera sus circunstancias especiales en el contexto de las contribuciones determinadas a nivel nacional” (COP20, 2014). Por ende, los objetivos de mitigación y adaptación en las NDC se presentan de manera inicial para facilitar la claridad y transparencia, y se definen como una combinación de contribuciones condicionales e incondicionales que se encuentran sujetas a recibir apoyo internacional para la transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y recursos financieros.

La región del Caribe cuenta con ciertas particularidades que comparten mayormente en común en sus metas y objetivos establecidos en sus NDC. Existen investigaciones que han determinado que los sectores de energía y AFOLU (Agricultura, Forestal y Otro Uso de la Tierra, por sus siglas en inglés) son los mayores responsables de las emisiones de GEI en la región. Dicho esto, de acuerdo con la encuesta realizada llamada NDC Survey Report Caribbean Region que se llevó a cabo a través de la CMNUCC en el 2020, las acciones que más se han llevado a cabo para mitigar las emisiones en el sector de energía han sido el desarrollo de proyectos de energías renovables y el desarrollo de estrategias y políticas de energía limpia. Mientras que en el sector AFOLU, la mayoría del progreso se ha desarrollado a través de acciones relacionadas a la protección y conservación de los bosques existentes, el desarrollo de estrategias para el manejo sustentable de los bosques y políticas de

deforestación. Sin embargo, a pesar de las acciones que se han realizado en ambos sectores, el nivel de financiamiento tanto en el sector de energía como en el de AFOLU, aparenta ser mínimo cuando se considera que estas SIDS dependen de la importación de combustibles fósiles y la prioridad que han dado al sector energético en sus planes climáticos y sus respectivas NDC.

Por otro lado, en relación a la adaptación, en su mayoría han existido acciones relacionadas a la creación de políticas para la adaptación al cambio climático, ya sea la creación de un Plan Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) o el equivalente e integraron estrategias de cambio climático dentro de proyectos claves de adaptación. Si bien las NDC no establecen medidas para algunos sectores que son de vital importancia para aumentar la resiliencia a largo plazo, como la salud y la educación, si son sectores que se han tomado en cuenta en los NAP. Ahora bien, a nivel nacional se podrían enfocar en más sectores para aumentar las capacidades de las comunidades con el propósito de hacer frente y adaptarse al cambio climático. No obstante, conectarlos al financiamiento climático internacional probablemente requiere de algunos cambios fundamentales en el enfoque de los principales fondos internacionales de cambio climático ya que algunos fondos han adoptado una interpretación relativamente estrecha de cómo se puede invertir el financiamiento climático, lo que limita las opciones y prioridades que los países pueden plantear y que principalmente se debe a falta de definiciones claras, directrices, métricas, datos y metodologías para caracterizar y estimar de manera separada lo que se debe categorizar como financiamiento para el desarrollo y el financiamiento climático, lo cual deja a las SIDS en una posición en desventaja (UN-OHRLLS, 2022).

Otros aspectos para tomar en consideración es que uno de los mayores retos que enfrentaron las islas del Caribe fue en la preparación de sus primeras NDC y el tiempo limitado que tuvieron que, sin duda alguna, no fue suficiente para hacer una planificación adecuada de acuerdo a las personas encuestadas en el NDC Survey Report Caribbean Region 2020. Por otro lado, respecto a las necesidades que existen para la implementación de las acciones, hay que destacar que, para la mitigación, se considera que debe haber una mayor transferencia de tecnología, apoyo en el proceso de MRV (Measurement, Reporting, and Verification, por sus siglas en inglés) construcción de capacidades y apoyo tanto técnico como financiero en los sistemas de transporte público. Mientras que, para atender las necesidades relacionadas a la adaptación, debe existir un mejor programa para el manejo de inundaciones, un aumento en la educación y capacitación de los locales, construcción de capacidades, un mejor manejo de

recursos de agua y apoyo técnico para la evaluación de vulnerabilidades (UNFCCC RCC St. George's, 2021).

Por último, es importante mencionar que los retos más complicados de superar para acceder a fondos internacionales están vinculados a una falta de capacidad para preparar las propuestas, falta de conocimiento sobre fuentes para acceder a fondos y una baja tasa de éxito en las solicitudes sometidas. Por ende, para mejorar dicho acceso con el propósito de recibir un apoyo más efectivo, es fundamental un aumento de presupuesto, un periodo de preparación más extenso y una disponibilidad más temprana (UNFCCC RCC St. George's, 2021).

Sin embargo, se debe enfatizar que las NDC emitidas por estas SIDS son muy generales y contienen poca información sobre las actividades específicas que se financian y sus costos. De hecho, la condicionalidad e imprecisión de las NDC pueden generar efectos negativos, como transferencias inadecuadas o acciones ineficientes a nivel local, que pueden llegar a generar dificultad para definir requisitos específicos (Pauw et al., 2020). Por lo tanto, estas SIDS deberían considerar explicar mejor su necesidad financiera para actuar, especialmente en la adaptación, en lugar de explicar sus objetivos actuales de reducción de emisiones, ya que representan menos del 1% de las emisiones globales de CO₂. Dicho esto, se debe tomar en consideración los diversos factores relacionados a una falta de capacidad tanto de recursos humanos como técnicas y sumándose razones vinculadas a la falta de tiempo y poca claridad sobre en qué consiste una NDC. Sin duda alguna, esto se puede evidenciar en las NDC actualizadas que son mucho mejor elaboradas haciendo énfasis en la necesidad de financiar proyectos para adaptación.

III.1 Contribuciones Nacionales Determinadas de Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda, un estado independiente en las Antillas Menores del mar Caribe, se compone principalmente de dos islas principales, Antigua y Barbuda, y varias islas más pequeñas, incluyendo Redonda, una isla deshabitada. Con una superficie total de 440 km², el país se encuentra al este-sureste de Puerto Rico, en la intersección del mar Caribe y el océano Atlántico. Antigua, la isla más grande y poblada, alberga la capital, St. John's, y es conocida por su topografía relativamente plana, con el punto más alto siendo el Monte Obama a 402 metros sobre el nivel del mar. Barbuda, situada al norte de Antigua, es notable por su refugio de vida silvestre y sus extensas playas de arena rosada. La economía del país depende en gran medida del turismo, que atrae a visitantes a sus costas por la belleza natural, el clima cálido y las aguas cristalinas.

La población de Antigua y Barbuda es de aproximadamente 100,000 habitantes, con una mezcla étnica predominante de afrodescendientes. La nación es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la intensificación de los huracanes, que representan desafíos significativos para su desarrollo sostenible y la conservación de sus ecosistemas costeros y marinos. De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2017 clasifica a Antigua y Barbuda en la posición #135 en 2015, mientras que el Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2019 dio un salto a la posición #13 en 2017 tras el paso de los huracanes Irma y María. Finalmente, el Índice Global de Riesgo Climático 2021 de Germanwatch coloca a Antigua y Barbuda en la posición #56 para el período 2000-2019 en su índice de riesgo climático a largo plazo, que analiza los países más afectados durante dicho período. Reconociendo el mencionado nivel de vulnerabilidad, el gobierno tiene en consideración la importancia que representa abordar estos desafíos a través de la participación activa en foros internacionales sobre el cambio climático y buscando apoyo para la adaptación y la mitigación a través de iniciativas como el programa "Citizen By Investment", que ha sido una fuente de financiamiento para proyectos de sostenibilidad¹.

Ahora bien, la primera NDC de Antigua y Barbuda, presentada el 15 de octubre de 2015, se desarrolló a través de un mandato del Gabinete liderado por el actual Primer Ministro Gaston Browne, donde se revisaron los objetivos de adaptación y mitigación. Además, el Comité Asesor Técnico fue el principal comité de redacción y revisión en el desarrollo de esta primera NDC. Este es un comité interinstitucional y multiactor que incluye 15 agencias gubernamentales, 3 ONG, grupos de interés comunitario y un representante de la coalición del sector privado. Adicionalmente, se organizaron consultas con partes interesadas del sector público, privado y de la sociedad civil, a través de reuniones, talleres, concienciación pública y publicación en línea (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

La primera NDC de Antigua y Barbuda marcó un importante punto de partida en su compromiso con el Acuerdo de París, estableciendo objetivos generales de mitigación y adaptación. Sin embargo, carecía de metas cuantificables específicas, lo que dificulta su evaluación en términos de ambición y justicia. Por ende, es importante destacar que la actualización de la NDC refleja un progreso significativo, introduciendo objetivos claros y ambiciosos, como lograr un 86% de energía renovable para 2030. Este cambio no solo muestra un mayor compromiso con la acción climática, sino que también destaca el papel de Antigua y

¹ El programa de "Citizen by Investment" de Antigua y Barbuda es una iniciativa gubernamental que permite a individuos extranjeros adquirir la ciudadanía de este país caribeño mediante una inversión significativa en su economía para propósitos de desarrollo.

Barbuda como líder entre las SIDS, promoviendo un enfoque inclusivo y de género en sus estrategias climáticas (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

El periodo de implementación se establece previo al 2020 y entre los años 2020 al 2030. Además, toma como punto referencia el año 2006 para la reducción de GEI (dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y los hidrofluorocarbonos con un alcance nacional) haciendo énfasis en el sector de energía, en la dependencia de combustibles fósiles y el costo de la energía, con el fin de aliviar la tasa de pobreza a través de un aumento en el acceso a la energía sustentable. Los sectores que incluyen la NDC de Antigua y Barbuda son: energía, salud, turismo, agricultura, residuos, agua, transporte, bosques y uso de suelo (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

Entre los objetivos condicionales para la adaptación se encuentran:

- Para el año 2025, aumentar la capacidad de desalinización del agua de mar en un 50% por encima de los niveles de 2015.
- Para el año 2030, mejorar y preparar todos los edificios para eventos climáticos extremos, incluyendo sequías, inundaciones y huracanes.
- Para el año 2030, satisfacer el 100% de la demanda de electricidad en el sector del agua y otros servicios esenciales (incluyendo salud, almacenamiento de alimentos y servicios de emergencia) a través de fuentes renovables fuera de la red.
- Para el año 2030, proteger todos los cuerpos de agua para reducir los riesgos de inundaciones e impactos en la salud.
- Para el año 2030, establecer un esquema de seguros asequible para agricultores, pescadores, propietarios residenciales y comerciales para hacer frente a las pérdidas derivadas de la variabilidad climática (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

Mientras que los objetivos condicionales para la mitigación se encuentran:

- Para el año 2020, establecer estándares de eficiencia para la importación de vehículos y electrodomésticos.
- Para el año 2020, finalizar los estudios técnicos con la intención de construir y operar una planta de energía a partir de residuos para el año 2025.
- Para el año 2030, lograr una matriz energética con 50 MW de electricidad proveniente de fuentes renovables, tanto en la red como fuera de ella, en los sectores público y privado.

- Para el año 2030, proteger todas las áreas restantes de humedales y cuencas con potencial de captura de carbono como sumideros de carbono (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

Los objetivos de adaptación y mitigación condicionales presentados en esta NDC están condicionados a que Antigua y Barbuda reciba apoyo internacional para el fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología y recursos financieros, incluyendo financiamiento a través del GCF, GEF, AF, además de organismos multilaterales y acuerdos bilaterales.

Por otro lado, Antigua y Barbuda se compromete a una serie de objetivos incondicionales que incluyen:

- Mejorar el entorno legal, político e institucional establecido para un desarrollo de bajas emisiones de carbono que logre la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
- Para el año 2020, actualizar el Código de Construcción para hacer frente a los impactos proyectados del cambio climático (Gobierno de Antigua y Barbuda, 2015).

Si bien la primera NDC de Antigua y Barbuda aparenta alcanzar un número considerable de sectores y que parte de sus objetivos se basan en metas cuantificables, no se puede ignorar el hecho de que también tienen objetivos que se pueden definir como abstractos ya que no establecen parámetros medibles que puedan evaluar el progreso realizado. No cabe dudas de que se evidencia una falta de claridad en las metas estipuladas que pueden ser producto de una falta de capacitación sobre la redacción de la NDC o la posibilidad de haber enfrentado un tiempo limitado para presentarla.

III.1.a El Financiamiento Climático en Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda, como una de las naciones caribeñas más vulnerables a desastres naturales, enfrenta amenazas significativas de eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones y sequías, que afectan tanto su economía como su infraestructura. Esta alta vulnerabilidad climática hace que sea imprescindible que el país reciba apoyo internacional, tanto de fuentes multilaterales como bilaterales, para cumplir con sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. La razón principal de esta necesidad radica en que el país, al igual que las otras SIDS, tiene capacidades financieras y técnicas limitadas para implementar por sí solo las acciones necesarias para enfrentar los impactos climáticos. Por lo tanto, el apoyo

financiero internacional es crucial para cerrar estas brechas y permitir que los países más vulnerables tomen las medidas correspondientes para reducir los riesgos y aumentar su resiliencia (Mohan, 2022).

Además, la alineación del financiamiento climático con las prioridades nacionales, como se establece en las NDC, es vital para garantizar que los recursos sean suficientes en los sectores críticos para la adaptación y mitigación, como energía, agua y agricultura (Robinson & Kalaidjian, 2022). La implementación de proyectos y programas de desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y fortalecimiento institucional depende en gran medida de esta asistencia financiera externa, sin la cual sería difícil para Antigua y Barbuda cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible y resiliencia climática (Atteridge & Canales, 2017).

Además, es importante destacar que, a pesar de los avances que ha realizado el país, especialmente en la protección de sus recursos naturales y programas sociales, esto ha significado que han tenido que realizar una inversión significativa para alcanzar dichos objetivos, lo cual sumado a la pequeña población que tiene el país, el gobierno de Antigua y Barbuda tiene ingresos fiscales anuales relativamente limitados que suman un promedio de US\$1.300.000.000 (BM, 2023).

Sin embargo, se debe reconocer que existen desafíos relacionados a financiar acciones para abordar el cambio climático. Se estima que el costo para realizar una transición para depender 100% de fuentes de energías renovables e implementar medidas de adaptación en todos los sectores establecidos representa una tarea muy difícil de alcanzar aun así dependiendo de una cooperación financiera suficiente de los fondos multilaterales ya que el país solamente pueda acceder a una pequeña porción de los recursos provenientes del exterior. De acuerdo al Reporte Bienal Actualizado (BUR, por sus siglas en inglés) publicado en el 2020, el costo para realizar una transición hacia una economía resiliente y de bajas emisiones tiene un costo de al menos US\$1.400.000.000.

Ahora bien, la institución encargada de coordinar las acciones para la mitigación en Antigua y Barbuda lo es el Departamento para el Medio Ambiente (DOE, por sus siglas en inglés). El DOE coordina la ejecución de proyectos relacionados con el medio ambiente, así como la participación activa de otros departamentos, ministerios, el sector privado, ONG y comunidades. Además, es responsable del monitoreo, informe y verificación de las acciones relacionadas con el clima y, también, organizar la compilación del inventario de GEI y el desarrollo de proyectos para recopilar información y dar seguimiento a las acciones climáticas. Hay que destacar que el DOE juega un papel fundamental en asegurar que los proyectos financiados por el clima estén plenamente alineados con la NDC de Antigua y Barbuda,

impulsando así la acción climática nacional. Sin embargo, la demora en la aprobación e implementación de proyectos de adaptación, que puede extenderse hasta cinco años, representa un desafío adicional para abordar los problemas urgentes del cambio climático (Holder, comunicación personal, 2023).

Como se mencionó anteriormente, los objetivos de adaptación y mitigación condicionales presentados en la primera NDC están sujetos a que Antigua y Barbuda reciba apoyo internacional para el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y recursos financieros, incluidos a través del GCF, el GEF, el FA y agencias multilaterales y acuerdos bilaterales. Dicho esto, para establecer expectativas, es importante mencionar que el gobierno de Antigua y Barbuda establece que el costo para implementar los objetivos de adaptación se estima en aproximadamente US\$20.000.000 por año durante los próximos diez años, y el costo de implementar los objetivos de mitigación se estima en aproximadamente US\$220.000.000 de acuerdo a la NDC. Sin embargo, estas cifras requieren un análisis más detenido.

III.1.b Financiamiento Climático recibido en Antigua y Barbuda durante el periodo 2016-2020

De acuerdo a la contabilización realizada (ver Anexo 2), el financiamiento climático recibido por Antigua y Barbuda durante el período 2016-2020 ascendió a US\$317.667.480, y tiene un enfoque prioritario en sectores clave como la energía, AFOLU, residuos, y transporte, se destaca por la intención de dirigir los esfuerzos tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático.

El sector energético, con una asignación de US\$55.707.325, representa el 17,5% del total del financiamiento climático, subrayando la importancia de la transición hacia fuentes de energía renovables, como la solar y eólica, para reducir las emisiones de GEI y que se alinea con uno de sus objetivos encaminado a satisfacer el 100% de la demanda de electricidad en el sector del agua y otros servicios esenciales para el 2030 y el objetivo condicional de lograr una matriz energética con 50 MW de electricidad proveniente de fuentes renovables, tanto en la red como fuera de ella, en los sectores público y privado.

Aunque los sectores de AFOLU, residuos y transporte recibieron una menor proporción del financiamiento, su inclusión refleja un enfoque integrado que considera diversas áreas de intervención para abordar los desafíos climáticos de manera comprehensiva pero que actualmente no se refleja el esfuerzo de proteger todos los cuerpos de agua para reducir los riesgos de inundaciones e impactos en la salud.

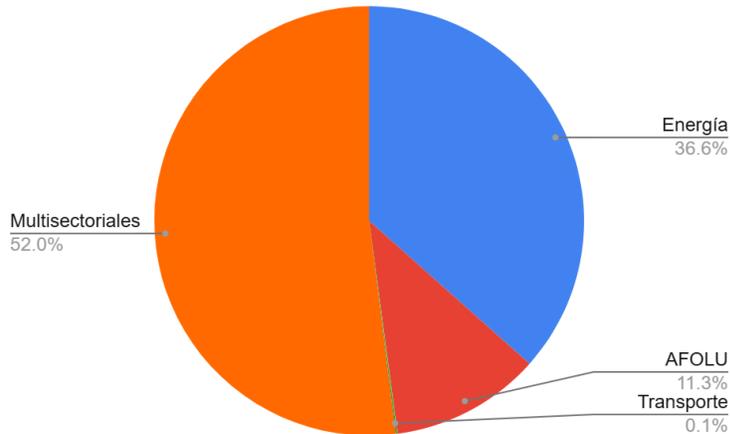
Sin embargo, el análisis revela que solo el 18,2% del financiamiento estuvo directamente relacionado con los sectores especificados en la NDC, mientras que una gran mayoría, el 81,8%, se destinó a propósitos multisectoriales no contemplados específicamente en la NDC aunque se podría mencionar que algunos de los proyectos multisectoriales toman un enfoque sobre la infraestructura que sí está definido de manera no cuantificable en la NDC bajo el objetivo de mejorar y preparar todos los edificios para eventos climáticos extremos, incluyendo sequías, inundaciones y huracanes. Esta distribución del financiamiento sugiere una amplia interpretación de las necesidades de financiamiento climático de Antigua y Barbuda, invirtiendo en proyectos que, aunque no están directamente alineados con los sectores de la NDC, contribuyen al desarrollo sostenible y la resiliencia climática de la nación.

Es notable que sectores críticos como la salud y el turismo, a pesar de estar incluidos en la NDC, no recibieron financiamiento climático internacional público específico. Sin embargo, estos sectores sí suelen ser financiados por bancos multilaterales y recursos financieros domésticos, principalmente a través de fondos nacionales. No obstante, dicho financiamiento tiende a clasificarse dentro de programas de desarrollo económico y social en lugar de iniciativas climáticas. Esta omisión señala una oportunidad para futuras asignaciones de recursos, considerando la importancia de estos sectores para la economía y el bienestar de Antigua y Barbuda, especialmente en términos de adaptación al cambio climático y la protección contra sus impactos. Aun así, los principales fondos internacionales continúan priorizando sectores como la agricultura y la energía, relegando el turismo y la salud a un papel secundario dentro de la clasificación bajo proyectos climáticos.

La estructura del financiamiento climático en Antigua y Barbuda resalta la complejidad de alinear los recursos financieros con las prioridades nacionales de acción climática. Mientras que la inversión en energía renovable refleja un compromiso con la mitigación de GEI, la significativa inversión en propósitos multisectoriales y de infraestructura indica un enfoque pragmático que busca maximizar el impacto del financiamiento climático en el desarrollo nacional. Aunque este enfoque amplio puede contribuir de manera importante a la resiliencia y sostenibilidad ambiental, es crucial una revisión continua y una planificación estratégica para asegurar que todos los sectores críticos, incluidos en la NDC, reciban el apoyo necesario para alcanzar los objetivos climáticos de Antigua y Barbuda. (Ver Figura 1).

Figura 1

Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Sector, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

Desde la perspectiva de los instrumentos financieros, se sugiere un enfoque equilibrado en el uso de diversos instrumentos financieros, adaptado a las necesidades y limitaciones económicas del país. Con US\$155.253.413 en donaciones, representando el 48.9% del financiamiento total, se destaca la importancia de este instrumento para el país. Las donaciones, por su naturaleza no reembolsable, son particularmente valiosas para Antigua y Barbuda, facilitando la implementación de proyectos de mitigación y adaptación sin incrementar la carga de la deuda nacional.

El papel de los préstamos, con un total de US\$155.516.535 y representando el 49% de los fondos, subraya su importancia como el segundo instrumento de financiamiento climático más utilizado. Es importante destacar que estos son préstamos concesionales provenientes en su mayoría de fondos y bancos multilaterales. Si bien estos ofrecen acceso a recursos significativos para la acción climática, también plantean consideraciones sobre la sostenibilidad financiera, capacidad institucional, salvaguardias tanto ambientales como sociales y la gestión de deuda, especialmente para las SIDS con limitados recursos financieros domésticos.

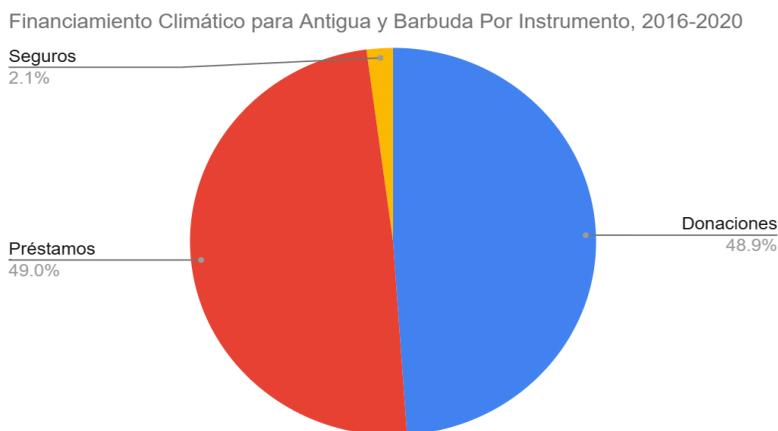
Los seguros climáticos, con una contribución de US\$6.897.532 (2,1% del total), emergen como un instrumento innovador y crucial para la gestión del riesgo y la adaptación. El CCRIF en Antigua y Barbuda ha jugado un papel crucial en la provisión de financiamiento rápido tras desastres naturales, como los huracanes. Es importante destacar que los fondos del CCRIF provienen tanto de donaciones de organizaciones internacionales como de aportes de los países miembros. Esta combinación de fuentes permite una rápida movilización de recursos para ayudar a las naciones afectadas, como se evidenció tras el huracán Irma, cuando Antigua

y Barbuda recibió un desembolso significativo del CCRIF para la recuperación del desastre (CCRIF SPC, 2020). Al mismo tiempo, se debe pensar en cómo los fondos provenientes del CCRIF puedan ser destinados a agricultores, pescadores, propietarios residenciales y comerciales para hacer frente a las pérdidas derivadas de la variabilidad climática para poder cumplir con el objetivo establecido en la NDC.

La combinación de estos instrumentos financieros subraya una estrategia multifacética para abordar las necesidades de financiamiento climático de Antigua y Barbuda, equilibrando la accesibilidad de fondos, la sostenibilidad financiera y la preparación ante desastres. Mientras que las donaciones y préstamos proporcionan el capital necesario para proyectos a largo plazo y estructurales en mitigación y adaptación, los seguros climáticos ofrecen una capa adicional de seguridad financiera contra impactos inmediatos de eventos climáticos adversos.

Este enfoque integrado no solo refleja una gestión prudente de los recursos financieros disponibles para la acción climática, sino que también destaca la necesidad continua de innovación en instrumentos financieros que puedan ofrecer soluciones adaptadas a las realidades de pequeños estados insulares en desarrollo. La experiencia de Antigua y Barbuda con el CCRIF, en particular, ofrece un modelo valioso de cómo los seguros climáticos pueden complementar estrategias más amplias de financiamiento climático, contribuyendo a la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo frente al cambio climático. No obstante, es esencial considerar y mencionar nuevamente las advertencias de algunos críticos sobre el uso de mecanismos de “*derisking*”, los cuales, aunque efectivos para movilizar inversión privada, pueden trasladar parte del riesgo financiero al sector público. Esto podría comprometer la sostenibilidad a largo plazo si no se gestionan adecuadamente, lo que subraya la importancia de equilibrar las ventajas inmediatas de atraer capital privado con una gobernanza financiera sólida y enfocada en el interés público (Gabor, 2021). (Ver Figura 2).

Figura 2



En cuanto a las fuentes de financiamiento, se observa un enfoque estratégico para maximizar los recursos disponibles para la acción climática. Con US\$131.526.193 provenientes de fondos multilaterales, representando el 41,4% del total, se destaca la importancia de estas entidades en la provisión de financiamiento climático. Organizaciones como el GCF, el GEF y el AF han jugado roles clave, subrayando el papel crítico de la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático.

La contribución de US\$110.116.535 por parte de bancos multilaterales, equivalente al 34,7% del financiamiento total, y con el CDB como el principal financiador, evidencia asimismo la relevancia de estas instituciones en el apoyo a proyectos climáticos en la región. Esta colaboración subraya la importancia de los mecanismos regionales de financiamiento para abordar las necesidades específicas de los pequeños estados insulares en desarrollo.

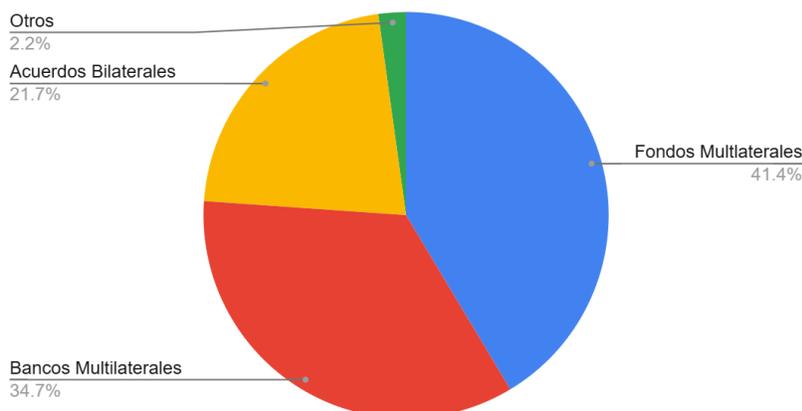
Los acuerdos bilaterales también jugaron un papel importante, con US\$69.127.220 o el 21,7% del total, provenientes de una variedad de países incluyendo Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Japón, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y la Unión Europea. Esta diversidad de fuentes bilaterales refleja un amplio reconocimiento internacional de la vulnerabilidad de Antigua y Barbuda al cambio climático y la necesidad de apoyo externo para fortalecer su resiliencia.

Adicionalmente, otros US\$7.000.189 (2,2% del total) provinieron de organizaciones e instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), y el CCRIF. Este financiamiento subraya el papel de las organizaciones internacionales en complementar los esfuerzos de financiamiento climático, ofreciendo apoyo técnico y financiero específico para proyectos clave.

La composición del financiamiento climático para Antigua y Barbuda ilustra un enfoque integrado y colaborativo, aprovechando una mezcla de fondos multilaterales, bilaterales, y de otras organizaciones internacionales para abordar los desafíos del cambio climático. La diversificación en las fuentes de financiamiento refleja una adaptación pragmática a las realidades financieras globales, asegurando que Antigua y Barbuda pueda acceder a los recursos necesarios para avanzar hacia un desarrollo más resiliente y bajo en carbono. (Ver Figura 3).

Figura 3

Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Fuente, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, en cuanto a los propósitos se refiere, hubo un total de US\$53.968.190 destinados a proyectos de mitigación, que representan el 17% del financiamiento climático recibido, reconociendo la contribución relativamente pequeña de Antigua y Barbuda a las emisiones globales de GEI, situando la mayor parte del enfoque y los recursos en la adaptación.

Mientras que la asignación de US\$251.895.605, equivalente al 79,3% del financiamiento climático, hacia proyectos de adaptación, subraya el reconocimiento de la vulnerabilidad de Antigua y Barbuda a los impactos del cambio climático. Este enfoque en la adaptación es crucial para aumentar la resiliencia de la nación insular frente a eventos climáticos extremos y cambios a largo plazo en el clima, asegurando la protección de sus ecosistemas, economía y comunidad.

Los proyectos transversales, que abarcan tanto la mitigación como la adaptación, recibieron US\$11.680.285, representando un 3,7% del total del financiamiento climático. Esta inversión en proyectos híbridos es importante, ya que aborda de manera integral los desafíos del cambio climático, promoviendo soluciones que tienen beneficios tanto para la reducción de emisiones como para la adaptación a los impactos climáticos ya en curso.

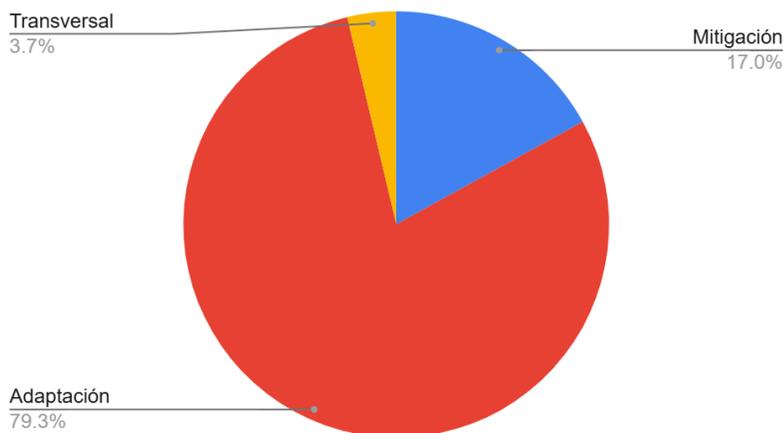
El co-financiamiento, con un total de US\$47.014.508 o el 14,8% del financiamiento climático, juega un papel vital en la ampliación de los recursos disponibles para la acción climática. Aunque no existe un estándar fijo para el co-financiamiento, su presencia en Antigua y Barbuda indica una participación colaborativa entre diversas fuentes de financiamiento, lo que puede potenciar el alcance y la eficacia de los proyectos climáticos. La variabilidad en los

porcentajes de co-financiamiento necesario refleja la diversidad de proyectos, programas e iniciativas, así como la complejidad de alinearlos con las fuentes de financiamiento y los objetivos específicos.

Este enfoque en la adaptación, junto con la inclusión de proyectos transversales y el apoyo mediante co-financiamiento, destaca una estrategia bien considerada de Antigua y Barbuda para abordar sus necesidades y desafíos climáticos a pesar de los recursos financieros limitados que han recibido. Aunque el financiamiento para la mitigación es menor en comparación con la adaptación, refleja adecuadamente la posición y responsabilidades del país en el contexto global del cambio climático. La continua evaluación de las necesidades de financiamiento, junto con una implementación correcta de los recursos, será crucial para asegurar que Antigua y Barbuda pueda seguir avanzando hacia sus objetivos de sostenibilidad y resiliencia (Ver Figura 4).

Figura 4

Financiamiento Climático para Antigua y Barbuda Por Propósito,
2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

III.2 Contribuciones Nacionales Determinadas de Dominica

Dominica, situada en el Caribe Oriental, abarca una superficie de 750.6 km², con un perfil geográfico caracterizado por un terreno montañoso y una extensa cobertura forestal que constituye más de la mitad de su territorio. Dominica experimenta un clima marítimo tropical, caracterizado por condiciones cálidas y húmedas a lo largo del año, lo que la expone a riesgos climáticos importantes, como huracanes y tormentas tropicales que han causado daños considerables en el pasado. Dado que su economía depende en gran medida del comercio

exterior, la agricultura y el turismo, la vulnerabilidad de la isla ante desastres naturales es evidente, subrayando la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas de resiliencia y adaptación al cambio climático.

De acuerdo al Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2017, Dominica se encuentra en la posición #2 en 2015, cuando el país fue golpeado por la Tormenta Tropical Erika, mientras que el Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2019 clasifica a Dominica en la posición #3 en 2017 cuando fue azotado por el Huracán María. Finalmente, el Índice Global de Riesgo Climático 2021 de Germanwatch coloca a Dominica en el puesto #11 para el período 2000-2019 en su índice de riesgo climático a largo plazo, que analiza los países más afectados durante dicho período. Estos indicadores resaltan la vulnerabilidad de Dominica y el impacto significativo en el PBI por estos eventos climáticos extremos (Gobierno de Dominica, 2020).

Ahora bien, la primera NDC de Dominica, presentada el 30 de septiembre de 2015, se desarrolló a través de una amplia consulta y aportes de asesores y partes interesadas, y se basa en políticas y estrategias nacionales claves que incluyen: la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2002); la Autoevaluación Nacional de Capacidades (2004); la Estrategia de Crecimiento y Protección Social; la Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones y Resilientes al Clima de Dominica y el Programa Estratégico sobre Resiliencia Climática (2012); la Política Nacional de Energía de Dominica (2014); y el Plan de Energía Sostenible de Dominica (2014).

El periodo de implementación de la NDC de Dominica comprende desde el comienzo del 2016 hasta el final del 2030 tomando como base el año 2014 para la reducción de GEI (dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y los hidrofluorocarbonos con un alcance nacional) en los sectores de energía, manufactura, transporte, comercial, residencial, agricultura, bosques, pesca y residuos sólidos.

Es importante destacar que, para Dominica, existe poca distinción entre las medidas de adaptación y mitigación; por ende, se busca implementar una respuesta integrada para construir la resiliencia climática en las comunidades vulnerables, al mismo tiempo que se impulsa un “crecimiento verde” a través de la transición hacia tecnologías de energía sostenible. Asimismo, reconociendo la responsabilidad común pero diferenciada de Dominica y sus capacidades limitadas para abordar el cambio climático, el país se compromete a reducir progresivamente las emisiones totales de GEI por debajo de los niveles de 2014 (164,5 Ggs estimados) con las siguientes tasas de reducción: 17,9% para 2020, 39,2% para 2025 y 44,7% para 2030.

Habiendo dicho esto, Para el año 2030, las reducciones totales de emisiones por sector serán las siguientes:

- Industrias energéticas: 98,6% (principalmente mediante el aprovechamiento de los recursos geotérmicos).
- Transporte: 16,9%
- Manufactura y construcción: 8,8%
- Comercial/institucional, residencial, agricultura, silvicultura, pesca: 8,1%
- Residuos sólidos: 78,6% (Gobierno de Dominica, 2015)

Además, Dominica se compromete a que sus bosques continúen secuestrando 100 Ggs de emisiones de GEI de manera anual durante el período comprendido entre 2020 y 2030. También, el desarrollo comercial y el aprovechamiento continuo de los recursos geotérmicos de Dominica permitirán, a partir de 2025, que el país exporte cantidades significativas de energía renovable (estimadas en más de 200 Ggs anuales) a los territorios franceses cercanos de Martinica y Guadalupe, contribuyendo así a los esfuerzos globales para reducir las emisiones de GEI (Gobierno de Dominica, 2015) .

Ahora bien, esta contribución está condicionada a recibir acceso oportuno a financiamiento internacional para el cambio climático, desarrollo y transferencia de tecnología, y apoyo para el fortalecimiento de capacidades en relación con las medidas prioritarias de adaptación y mitigación (Gobierno de Dominica, 2015).

Por otro lado, a pesar de que no se mencionan objetivos y acciones climáticas para la adaptación, como mencionado anteriormente, se utilizan como guías la Estrategia de Desarrollo de Bajas Emisiones y Resilientes al Clima de Dominica y el Programa Estratégico sobre Resiliencia Climática que fueron desarrolladas a través de un extenso proceso consultivo que contó con el apoyo del Programa Piloto para la Resiliencia Climática (PPCR) financiado por los Fondos de Inversión Climática.

Es importante destacar que luego del paso del huracán María en el 2017, el cual destruyó un 95% de las viviendas de Dominica y significó la pérdida del 226% del PBI de la nación, el país se propuso convertirse en la primera nación resiliente al cambio climático con el objetivo principal de evitar una catástrofe similar (ONU, 2017). La experiencia de Dominica después del huracán María marcó la importancia de incluir la infraestructura resiliente como un componente central en los proyectos de reconstrucción (Carrete, entrevista virtual, 2023).

III.2.a El Financiamiento Climático en Dominica

Dominica ha estado, históricamente, en una posición vulnerable en términos económicos, sociales, culturales y climáticos debido a su susceptibilidad a los desastres naturales y su fragilidad ecológica y económica. Su nivel de vulnerabilidad al cambio climático, al igual que muchas SIDS, se ve agravada por presiones externas que afectan su capacidad de resiliencia y adaptación. A pesar de que Dominica ocupa el puesto 98 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que sitúa a Dominica en la categoría de 'alto' desarrollo humano, el país aún enfrenta problemas de pobreza. Según la Evaluación de la Pobreza del País (2016), casi el 30% de la población en Dominica todavía vive por debajo de la línea de pobreza definida localmente. El 10% más rico de la población de Dominica representa el 37,2% del consumo del país, mientras que el 10% más pobre sólo representaba el 2% del gasto de consumo. Las principales influencias en la pobreza de la isla son factores externos como la reducción de las exportaciones, el aumento de los precios de los alimentos, la crisis económica global y los desastres naturales.

Dominica enfrenta una situación económica debilitada debido a los altos costos de importación de combustibles fósiles, la necesidad de reconstrucción tras desastres naturales y una carga significativa de deuda. Esta vulnerabilidad económica es común en varias naciones del Caribe, incluida Antigua y Barbuda, donde los desequilibrios fiscales y las limitaciones para invertir en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático son frecuentes.

Ahora bien, Dominica se comprometió a convertirse en el primer país del mundo con capacidad de resiliencia climática a través de un programa llamado "Build Back Better" establecido por el PNUD (CS Global Partners, 2019), que tiene como enfoque garantizar la resiliencia ante futuros impactos e informar la política del Gobierno. En consecuencia, toda infraestructura gubernamental nueva y renovada debe ser construida o reforzada para cumplir con los estándares actuales para eventos sísmicos y de huracanes, así como incorporar tecnología verde y energía renovable. La piedra angular del proceso de reconstrucción incluye varios aspectos, como: el uso de recursos para la reconstrucción basados en subvenciones de una variedad de donantes, el uso de seguros climáticos y acuerdos bilaterales, la inversión en infraestructura resiliente al clima, la implementación de políticas fiscales y reformas rentables, los controles de gastos, los controles en la ampliación de la deuda externa, la participación de la diáspora y el establecimiento de marcos legales y regulatorios para abordar las amenazas, causas, consecuencias del cambio climático y el fortalecimiento del programa "Citizen by Investment". Este último programa ha permitido a Dominica abordar las necesidades urgentes

mientras se negocian fondos internacionales a través de la venta de ciudadanía. Asimismo, el CREAD ha sido un paso fundamental para coordinar la reconstrucción y las iniciativas de resiliencia, asegurando que los proyectos se alineen con la visión nacional de convertirse en la primera nación resiliente al clima del mundo (Carrete, 2024, entrevista virtual).

Antes de proceder a analizar el financiamiento climático recibido en Dominica, es importante destacar que la primera NDC del país establece que se deben realizar inversiones que alcanzan aproximadamente un total de US\$102.000.000 para propósitos de mitigación en una serie de proyectos específicos que fueron determinados. Por otro lado, para propósitos de adaptación se estima un costo aproximado de US\$25.000.000 durante el periodo 2016-2020.

III.2.b Financiamiento Climático recibido en Dominica durante el periodo 2016-2020

De acuerdo a la contabilización realizada (ver Anexo 2), el financiamiento climático recibido por Dominica durante el período 2016-2020, que ascendió a US\$240.808.497, ilustra un compromiso significativo con la acción climática, alineado en gran parte con las prioridades establecidas en su primera NDC para propósitos de mitigación. Este análisis revela una estrategia enfocada en sectores clave para la mitigación y adaptación al cambio climático, reflejando tanto los esfuerzos nacionales como el apoyo internacional en esta dirección.

El sector de energía, con una asignación de US\$88.043.477 y representando el 36,6% del total del financiamiento climático, subraya la prioridad dada a la mitigación a través de la transición hacia energías renovables, incluyendo la solar y la geotérmica, lo cual sin duda alguna está alineado con su objetivo de reducir en un 98.6% las emisiones en el sector energético para el 2030. Este enfoque no solo busca reducir las emisiones de GEI sino también promover la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental en Dominica.

La asignación de US\$27.247.300 de dólares al sector AFOLU (11,3%) se encuentra alineado con su meta de reducir en un 8,1% las emisiones de GEI del sector AFOLU para el 2030, en tanto que se asignaron \$83,900 de dólares al sector marítimo (0,03%), y US\$274.417 al sector de transporte (0,11%), el cual está completamente alejado de su objetivo de reducir en un 16,9% las emisiones de dicho sector para el 2030.

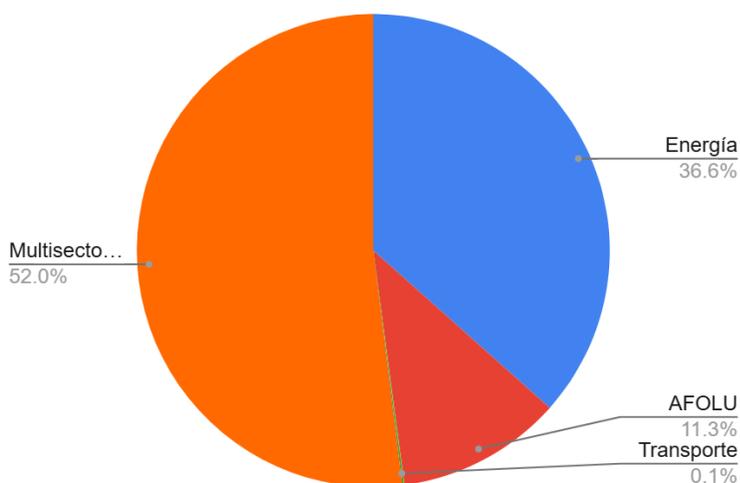
El hecho de que el 48,02% del financiamiento esté directamente relacionado con los sectores especificados en la NDC, mientras que un 51,98% se destinó a propósitos multisectoriales y de infraestructura, indica una flexibilidad en la aplicación de los fondos para abarcar un rango más amplio de proyectos que contribuyan a la resiliencia y desarrollo sostenible de Dominica. Es notable, sin embargo, la falta de financiamiento específico para los

sectores de manufactura y residuos mencionados en la NDC, lo que podría señalar áreas de oportunidad para futuras asignaciones de recursos.

Esta distribución del financiamiento climático demuestra un enfoque pragmático hacia la acción climática en Dominica, equilibrando entre la mitigación directa a través de la energía renovable y la adaptación en sectores críticos para la economía y el medio ambiente de la isla. Además, la inversión en proyectos multisectoriales y de infraestructura refleja una comprensión de que la acción climática eficaz requiere un enfoque integrado que aborde tanto las necesidades inmediatas como las de largo plazo para la sostenibilidad y resiliencia climática. Sin embargo, la ausencia de financiamiento dirigido específicamente a sectores mencionados en la NDC subraya la necesidad de una revisión continua y ajustes en la estrategia de financiamiento climático para asegurar que todos los sectores críticos reciban el apoyo necesario conforme a las prioridades nacionales (Ver Figura 5).

Figura 5

Financiamiento Climático para Dominica Por Sector, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, la composición del financiamiento climático de Dominica en el período 2016-2020 destaca la diversidad de instrumentos financieros desplegados para abordar los desafíos del cambio climático, adaptándose a la realidad económica de estas SIDS y las limitaciones específicas de un país de renta media. La asignación de US\$49.287.336 en donaciones, que representa el 20,5% del financiamiento total, subraya una leve dependencia de contribuciones no reembolsables que se pueden llegar a considerar como inconvenientes tomando en consideración que, una de las exigencias que usualmente tienen países como

estas SIDS es que los recursos deben llegar a través de donaciones para evitar generar mayores cargas en las deudas externas.

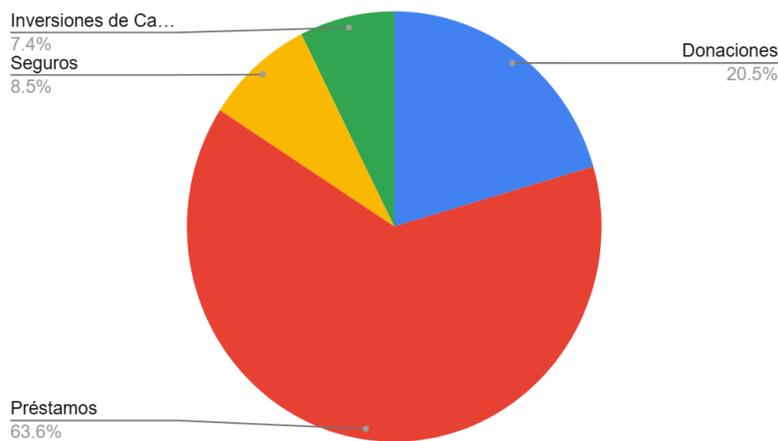
Los recursos bajo préstamos, con un total de US\$152.267.877 que constituye el 63.23% de los fondos movilizados, indican una fuerte inclinación hacia esta forma de financiamiento, con el BM emergiendo como el principal prestamista. Esta dependencia de los préstamos plantea cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de Dominica para gestionar obligaciones financieras a largo plazo, especialmente dada la vulnerabilidad económica y ambiental inherente a su condición de SIDS.

Los seguros climáticos, sumando US\$20.348.822 o el 8,5% del total, destacan el papel crucial de estos mecanismos como herramienta de gestión de riesgos, permitiendo una respuesta rápida a desastres naturales. La actuación del CCRIF en este contexto subraya la importancia de contar con sistemas de seguro adaptados a las realidades de los países insulares, proporcionando soporte financiero inmediato post-desastre.

Mientras que las inversiones de capital, aunque representan la menor fracción del financiamiento con US\$17.857.142 o el 7,4%, son fundamentales para el desarrollo de infraestructuras resilientes al clima y proyectos de mitigación y adaptación (Ver Figura 6).

Figura 6

Financiamiento Climático para Dominica Por Instrumento, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

Esta distribución de financiamiento climático refleja los desafíos asociados a la movilización de recursos financieros. La predominancia de los préstamos sobre las donaciones resalta la necesidad de explorar mecanismos financieros innovadores y sostenibles que puedan ofrecer a Dominica y otras SIDS opciones de financiamiento más favorables. La expansión de

los seguros climáticos y el aumento de las inversiones de capital pueden jugar un papel importante en este sentido, ofreciendo vías para una gestión más efectiva de los riesgos climáticos y apoyando el desarrollo de proyectos que contribuyan a la resiliencia y sostenibilidad a largo plazo.

Por otro lado, la procedencia de los fondos destaca la diversificación de fuentes y la importancia de la cooperación internacional en la movilización de recursos para la acción climática. Con un total de US\$240.808.497 movilizados para proyectos relacionados al cambio climático, la isla ha priorizado inversiones en sectores clave como energía, AFOLU, pesca y transporte, alineando estos esfuerzos con las metas y objetivos de su NDC.

Los fondos multilaterales proporcionaron US\$79.665.155, lo que representa el 33,2% del total del financiamiento climático. Esta contribución provino de entidades importantes como el GCF, el GEF y el AF y el CIF.

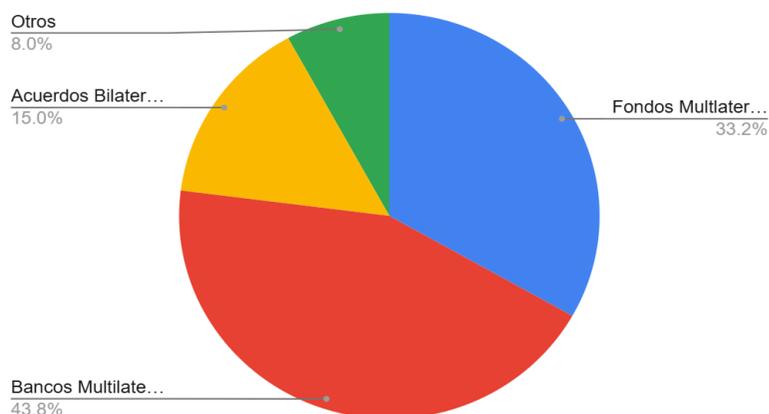
Los bancos multilaterales, incluidos el BM y el CDB, jugaron un papel aún más significativo, aportando US\$105.421.300, o el 43,8% del financiamiento. Este apoyo destaca la relevancia de los préstamos en el financiamiento de la acción climática, proporcionando recursos esenciales para la implementación de proyectos a gran escala.

Por su parte, los acuerdos bilaterales contribuyeron con US\$36.103.200 (15% del total), provenientes de una variedad de países, incluidos Canadá, Francia, Italia, Suiza, el Reino Unido, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta diversidad en las fuentes bilaterales demuestra la amplitud del apoyo internacional y la colaboración con múltiples socios para abordar las necesidades específicas de Dominica en términos de cambio climático.

Además, las organizaciones internacionales aportaron US\$20.348.822, representando el 8% del financiamiento climático recibido, siendo el único contribuyente el CCRIF con un financiamiento dirigido a la reducción del riesgo de desastres y al fortalecimiento de la capacidad de adaptación de Dominica (Ver Figura 7).

Figura 7

Financiamiento Climático para Dominica Por Fuente, 2016-2020



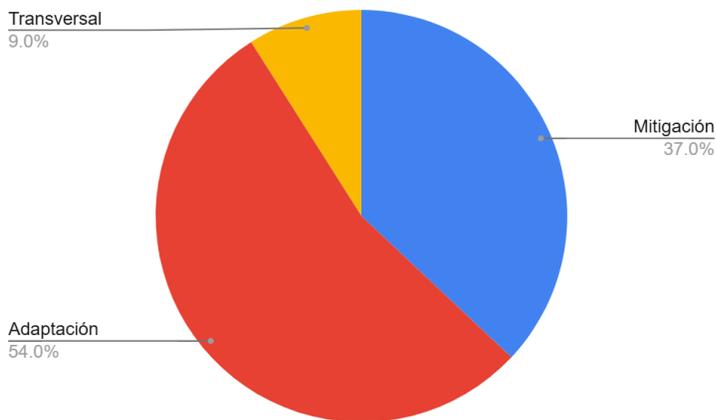
En relación a los propósitos del financiamiento climático recibido, la asignación de fondos hacia proyectos de mitigación, que sumaron US\$87.747.477 o el 37% del total, sugiere un compromiso significativo con la reducción de las emisiones de GEI, a pesar de que la contribución de Dominica a las emisiones globales es mínima.

El financiamiento dirigido a proyectos de adaptación ascendió a US\$129.684.075 representando el 54% del financiamiento total. Esta proporción subraya la prioridad de Dominica de fortalecer su resiliencia frente a los efectos adversos del cambio climático, una necesidad crítica dada su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos y otros impactos relacionados con el cambio climático. La inversión en adaptación es esencial para proteger la economía, los ecosistemas y las comunidades de la isla, asegurando su capacidad para enfrentar y recuperarse de los desafíos climáticos. Dicho esto, hay que destacar que si bien Dominica estableció un su NDC que necesitarían aproximadamente US\$25.000.000, se debe tomar en consideración que el paso del huracán Maria en el 2017 obligó al país a tener que recalcular los costos y, al mismo tiempo, replantear sus necesidades financieras con el propósito de alcanzar su objetivo de convertirse en la primera nación resiliente al cambio climático.

Los proyectos transversales, que abordan simultáneamente la mitigación y la adaptación, recibieron US\$21.459.808, lo que constituye el 9% del total del financiamiento climático (Ver Figura 8).

Figura 8

Financiamiento Climático para Dominica Por Propósito, 2016-2020



El co-financiamiento, con US\$43.048.834 de dólares o el 17,9% del total, indica una colaboración entre diversas fuentes de financiamiento, lo cual es fundamental para ampliar el alcance y la escala de los proyectos climáticos en Dominica. La variabilidad en los requisitos y porcentajes de co-financiamiento según el proyecto subraya la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad en las estrategias de financiamiento climático, asegurando que se atiendan las necesidades específicas de cada iniciativa y se maximice el impacto de la inversión.

III.3 Contribuciones Nacionales Determinadas de Santa Lucía

Santa Lucía es una isla ubicada en el Caribe, específicamente al noroeste de Barbados y al sur de Martinica. Con una extensión de aproximadamente 616 km², su longitud máxima es de 42 km y su ancho máximo de 22 km. Posee una zona marítima continua de 24 millas náuticas y una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, caracterizándose por un perfil costero de aproximadamente 158 km con una plataforma continental estrecha que desciende abruptamente en la costa oeste.

Desde el punto de vista topográfico, la isla es predominantemente volcánica, lo que ha dado lugar a un relieve marcado por picos altos, valles profundos y bosques lluviosos en su interior, destacando las famosas Pitons en la costa suroeste. El monte Gimie, el pico más alto, alcanza los 958 metros sobre el nivel del mar. Esta topografía influye directamente en la hidrografía de la isla, caracterizada por numerosos ríos que descienden rápidamente desde el centro hacia el mar Caribe.

El clima de Santa Lucía es tropical húmedo, moderado por los vientos alisios del noreste, lo que proporciona condiciones agradables durante todo el año. La temperatura media anual varía de 26 °C a 32 °C a nivel del mar, disminuyendo a un promedio de 13 °C en las cimas montañosas. La isla experimenta una estación lluviosa de junio a noviembre, marcada por el paso de sistemas tropicales, y una estación seca de diciembre a mayo. Esta variabilidad climática, junto con su ubicación dentro del cinturón de huracanes del Atlántico, expone a Santa Lucía a un alto riesgo de ciclones tropicales y deslizamientos de tierra, situándose entre los estados más vulnerables a eventos climáticos inducidos.

En términos demográficos, la población de Santa Lucía en 2018 se estimaba en 178,694 habitantes, con una distribución casi equitativa entre hombres y mujeres. La estructura demográfica ha experimentado cambios significativos, reflejando una transición hacia una población envejecida, lo que plantea nuevos desafíos en términos de servicios de salud y protección social, así como implicaciones para la fuerza laboral.

Santa Lucía, al igual que otras SIDS, se enfrenta a la perspectiva de pérdidas y daños irreversibles y permanentes como resultado del cambio climático. El Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2017 clasifica a Santa Lucía en la posición #49 en 2015, mientras que el Índice Global de Riesgo Climático del Germanwatch 2019 descendió a la posición #124 en 2017. Finalmente, el Índice Global de Riesgo Climático 2021 de Germanwatch coloca a Antigua y barbuda en la posición #51 para el período 200-2019 en su índice de riesgo climático a largo plazo, que analiza los países más afectados durante ese período.

Dicho esto, la primera NDC de Santa Lucía, presentada el 17 de noviembre de 2015, se preparó a través de un proceso consultivo que involucró a los principales actores del sector, quienes participaron inicialmente en el proceso de la Tercera Comunicación Nacional, para proveer aportes en el desarrollo del Inventario de Gases de Efecto Invernadero y la Evaluación de Mitigación para luego, a través de un ejercicio de validación, buscar el apoyo nacional sobre las medidas y objetivos propuestos. El ejercicio recibió un considerable apoyo técnico y de orientación por parte de Stiebert Consulting, Enviro Economics, Climate Analytics y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos (Gobierno de Santa Lucía, 2015).

Es importante mencionar que los objetivos de mitigación de la NDC de Santa Lucía se establecen bajo la proyección de “Business as Usual” (BAU, por sus siglas en inglés) y consideran las reducciones de emisiones en los sectores de demanda energética, generación de electricidad, transporte, procesos industriales, agricultura y residuos. Cabe destacar que el sector AFOLU no fue incluido ya que existía un alto grado de incertidumbre en el desarrollo de las proyecciones. Las metas establecidas para la reducción de emisiones se basan en las proyecciones calculadas para el año 2025 y el 2030 tomando como año base el 2010 con una amplia cobertura sobre todo el país (Gobierno de Santa Lucía, 2015).

Estas metas condicionadas establecen:

- Reducción de emisiones de GEI en un 16% en comparación al BAU para el 2025
- Reducción de emisiones de GEI en un 23% en comparación al BAU para el 2030

Para ser más concretos, las intervenciones propuestas que se sugieren en los determinados sectores mencionados son;

Energía:

- Mejorar la eficiencia energética en los edificios
- Mejorar la eficiencia energética en los electrodomésticos
- Mejorar la eficiencia en la distribución de agua y en la red de suministro

Generación Eléctrica:

- Alcanzar el 35% de energía renovable para 2025 y del 50% para 2030, basado en una combinación de fuentes de energía geotérmica, eólica y solar
- Mejorar la eficiencia de la distribución y transmisión de la red

Transporte:

- Vehículos eficientes
- Mejora y expansión del transporte público (Gobierno de Santa Lucía, 2015)

Ahora bien, considerando el contexto económico de la SIDS, las limitaciones en sus recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos para implementar las medidas necesarias para lograr las reducciones de emisiones previstas, el país condiciona sus metas establecidas en su NDC en el recibimiento de asistencia financiera y tecnológica internacional para alcanzar los objetivos (Gobierno de Santa Lucía, 2015).

En relación con la adaptación al cambio climático, el gobierno de Santa Lucía establece el documento Saint Lucia Climate Change Adaptation Policy (CCPA, por sus siglas en inglés) como guía para que el país junto a su gente, sus medios de subsistencia, sistemas sociales y medio ambiente sean resilientes a los riesgos e impactos del cambio climático. Habiendo dicho esto, hay que destacar que se han identificado acciones necesarias en: códigos de construcción, la infraestructura de drenaje, sistemas de alerta temprana, plan comprensivo sobre el uso de suelo, el uso de cisternas de agua, entre otros (Gobierno de Santa Lucía, 2015).

Por tal razón, hay que destacar que el financiamiento sería una limitación crítica para la capacidad de Santa Lucía de adaptarse a los impactos del cambio climático, siendo fundamental contar con financiamiento internacional a través de los mecanismos financieros de la CMNUCC. De igual manera, y de acuerdo a la primera NDC establecida, el gobierno de Santa Lucía buscaría además una combinación de fuentes de financiamiento para la adaptación, que podrían incluir incentivos económicos y fiscales, financiamiento del sector privado, apoyo de agencias y programas regionales y procesos bilaterales, y en casos limitados, financiamiento concesional para el sector privado, la sociedad civil y el público en general.

La primera NDC de Santa Lucía refleja ser sencilla, ya que no busca diversificar sus acciones de mitigación para reducción de GEI en otros sectores y solo se enfoca en el sector de energía y de transporte. Al mismo tiempo, se puede destacar que solamente cubren tres gases (CO₂, CH₄ y N₂O) para efectos de su compromiso. Sin embargo, a pesar del compromiso establecido en relación a sus contribuciones para mitigación, Santa Lucía

considera que se trata de un plan ambicioso y agresivo a pesar de que el país solo representa un 0.0015% de las emisiones de GEI globales.

III.3.a El Financiamiento Climático en Santa Lucía

Al igual que muchas SIDS, Santa Lucía contribuye de manera mínima a los efectos del cambio climático tomando en consideración el porcentaje de emisiones globales de GEI que representa un 0,0015%, sin embargo y al mismo tiempo, enfrenta un futuro incierto como consecuencia de los impactos emergentes y anticipados del cambio climático global en todos los aspectos de su desarrollo. Estos incluyen, pero no se limitan a, amenazas para la infraestructura costera y los activos económicos debido al aumento del nivel del mar, los impactos de eventos climáticos extremos más intensos y posiblemente más frecuentes, impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas, en los sectores de agua, producción de alimentos y servicios financieros; cambios en la distribución e intensidad de las lluvias, lo que resulta en inundaciones y sequías; degradación de los recursos costeros; y la intrusión salina en los acuíferos (Gobierno de Santa Lucía, 2021). Algunos de estos impactos ya se están sintiendo, lo que resulta en grandes desembolsos de recursos financieros para medidas correctivas y restaurativas, impactos negativos en los medios de vida, presiones sobre las finanzas del sector público y pérdida de vidas.

Ahora bien, hay que destacar que el PBI de la isla y su desempeño económico hacen que sea poco probable que la isla pueda asegurar los recursos necesarios para abordar los impactos del cambio climático únicamente a través de fondos locales. Esto se complica aún más por la clasificación internacional del país como un país de renta media, lo que excluye a la isla de acceder a ciertos financiamientos concesionales. Este tipo de financiamiento, el cual se basa en el PIB y no en la capacidad del país para hacer frente a un desastre ambiental causado por desastres naturales extremos, representa un abandono del principio CBDR y coloca una carga significativa en el país para abordar un desafío que no ha causado y para el cual no tiene recursos. Por lo tanto, la isla está en la obligación de movilizar recursos técnicos y financieros internacionales significativos para abordar el cambio climático y sus impactos.

Para establecer los parámetros y las expectativas, de acuerdo a la primera NDC de Santa Lucía, los costos de inversión acumulativa total para alcanzar los objetivos de mitigación para 2030 se estiman en alrededor de US\$218.000.000, y los costos del programa gubernamental se estiman en US\$23.000.000. Mientras que, los costos de inversión acumulativa total para alcanzar los objetivos de mitigación para 2025 se estiman en alrededor de US\$183.000.000 (a precios de 2015) y los costos del programa gubernamental se estiman

en US\$19.000.000. Para aclarar, los costos de inversión se refieren al financiamiento de capital total necesario para implementar las acciones de mitigación que son incrementales a los gastos basales. Esto no incluye los ahorros de energía asociados con la implementación de medidas ni cambios en los costos operativos. Por otro lado, los costos del programa se refieren a los gastos del gobierno para apoyar el programa e incluyen: costos de planificación, realización de estudios, desarrollo de estrategias, implementación de regulaciones, aplicación, desarrollo de capacidades y campañas de concienciación pública. En relación al financiamiento para proyectos de adaptación, es importante destacar que no existen estimaciones de los costos relacionados a dicho propósito.

Ahora bien, en Santa Lucía existen desafíos relacionados a la participación limitada. A pesar de que la participación de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, ha aumentado en las fases de planificación y revisión de proyectos climáticos, todavía existe una falta significativa de involucramiento en las fases de implementación y monitoreo. Además, aunque la participación de la sociedad civil es crucial, la capacidad técnica a menudo no es suficiente para involucrarse plenamente en proyectos de financiamiento climático que son más complejos (Henry, entrevista virtual, 2023). Por ende, es imprescindible destacar la necesidad que existe en fomentar la participación de la sociedad civil con el propósito de fortalecer la capacidad para diseñar, implementar y acceder a financiamiento para proyectos climáticos a través de un componente estándar para garantizar una participación sostenible.

III.3.b Financiamiento Climático recibido en Santa Lucía durante el periodo 2016-2020

De acuerdo a la contabilización realizada (ver Anexo 2), el financiamiento climático recibido por Santa Lucía durante el período de 2016 a 2020, que resultó en un total de US\$232.466.251, refleja un compromiso enfocado y estratégico hacia la acción climática, alineada con los objetivos y metas establecidos en su NDC. Esta asignación financiera ha permitido a Santa Lucía abordar desafíos clave en sectores críticos para la mitigación del cambio climático y la adaptación, priorizando la transición hacia energías renovables.

El enfoque en el sector energético y la agricultura, que recibieron el 18,2% y 16,9% respectivamente del financiamiento total, subraya la importancia de estas áreas en la reducción de las emisiones de GEI y el fortalecimiento de la resiliencia climática de la isla, a pesar de que el sector de la agricultura no se incluyó como un sector a intervenir en la NDC. Ahora bien, no cabe duda de que estas inversiones son cruciales para Santa Lucía, no solo para cumplir con sus compromisos climáticos sino también para promover un desarrollo sostenible que asegure

la seguridad alimentaria y energética. Dicho esto, es importante destacar que gran parte de las metas establecidas en la primera NDC son relevantes al sector de energía, específicamente para mejorar la eficiencia energética tanto de los edificios como de los electrodomésticos y la generación de esta a través de fuentes renovables. El país ha mostrado señales de poder alcanzar su objetivo de obtener el 35% de energía renovable para 2025 y del 50% para 2030, basado en una combinación de fuentes de energía geotérmica, eólica y solar, tomando en consideración que la compañía GlobalData, junto a Energy Monitor, colocan a Santa Lucía en el primer puesto de países que experimentan las transiciones de energía renovable más rápidas para los próximos cinco años (Ferris, 2023). Por otro lado, el sector transporte ha recibido un 0,7% del total del financiamiento recibido aunque, hasta cierto punto los proyectos que han sido financiados pueden estar alineados con sus objetivos imprecisos que se resumen en obtener vehículos eficientes y mejorar el transporte público.

La asignación significativa de fondos hacia propósitos multisectoriales, marítimos, de infraestructura y AFOLU, representando el 64,8% del total del financiamiento climático, indica un reconocimiento de la necesidad de un enfoque integral que abarque diversos aspectos del desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático (Ver Figura 9).

Figura 9



Fuente: Elaboración Propia

Sin embargo, la observación de una falta de financiamiento específico para los sectores de procesos industriales, a pesar de su inclusión en la NDC, sugiere un área de oportunidad para el futuro. La inclusión de estos sectores en la planificación y asignación de recursos

futuros podría ser clave para cerrar brechas en la acción climática y asegurar una transición completa hacia prácticas más sostenibles y bajas en carbono en todas las áreas de la economía de Santa Lucía.

La estrategia de financiamiento climático de Santa Lucía publicada en el 2020 demuestra la importancia de alinear los recursos financieros con las prioridades nacionales de acción climática, asegurando que cada sector reciba la atención necesaria para avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y resiliencia climática. Además, refleja la necesidad continua de evaluar y ajustar las estrategias de financiamiento para abordar los desafíos emergentes y las oportunidades dentro del contexto de cambio climático y desarrollo sostenible de la isla. La adaptabilidad y la visión a largo plazo serán esenciales para maximizar el impacto de estos fondos y fomentar un desarrollo resiliente al clima en Santa Lucía. Dicho esto, se enfatiza la importancia de la inversión en adaptación a través de recursos propios del país, tanto públicos como privados, sin necesariamente ser reconocidos como inversión en adaptación al cambio climático. Santa Lucía ha tenido éxito en acceder a fondos de fuentes bilaterales y multilaterales, incluido su primer proyecto presentado aprobado por el AF en 2019, centrado en el sector agrícola. También, se subraya la importancia de un proceso iterativo y continuo para financiar el NAP, que involucra definir prioridades de financiamiento, desarrollar conceptos de proyectos/programas, alinear conceptos con fuentes de financiamiento, elaborar propuestas completas, aprobar proyectos, implementar proyectos y monitorear y evaluar la implementación del proyecto (Gobierno de Santa Lucía, 2020).

En cuanto a los instrumentos financieros utilizados, se refleja una diversificación en los mismos. Con US\$66.383.610 obtenidos a través de donaciones, lo que representa el 28,6% del total de los recursos financieros, se destaca la importancia de este tipo de apoyo financiero no reembolsable para el país. Las donaciones juegan un papel crucial al permitir la implementación de proyectos climáticos sin aumentar la carga de deuda pública, facilitando así intervenciones esenciales para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resiliente al clima.

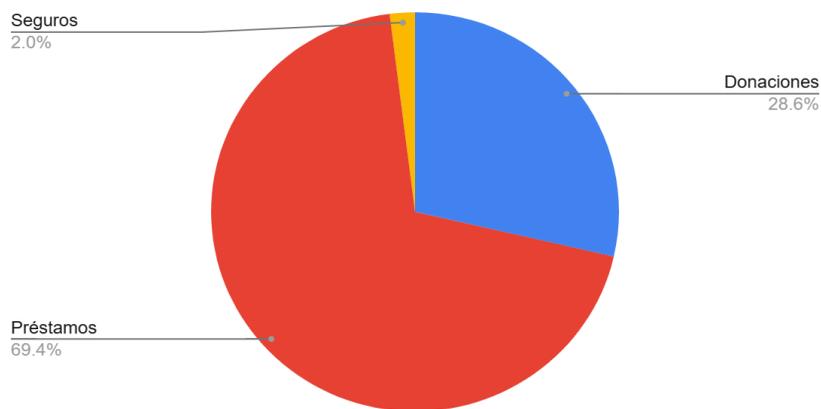
Por otro lado, el predominio de los préstamos, que sumaron US\$161.375.685 y representaron el 69,4% de los fondos movilizados, indica una fuerte dependencia de este instrumento de financiamiento. El CDB emerge como el mayor prestamista, lo que subraya su papel central en apoyar los esfuerzos de Santa Lucía para combatir el cambio climático. Aunque los préstamos proporcionan una fuente significativa de financiamiento, también implican consideraciones sobre la sostenibilidad de la deuda y la capacidad de manejo financiero a largo plazo del país, especialmente en lo que respecta a la gestión y amortización de dichos préstamos.

Los seguros climáticos, con un total de US\$4.707.176, representan el 2% del financiamiento climático recibido, destacando un enfoque innovador en la gestión de riesgos asociados a eventos climáticos extremos. El CCRIF como único emisor de pagos para estos seguros refleja la importancia de contar con mecanismos financieros que puedan ofrecer respuestas rápidas y efectivas tras desastres naturales. Esta herramienta financiera es esencial para mitigar el impacto económico inmediato de tormentas tropicales y huracanes, contribuyendo a la recuperación y reconstrucción post-desastre de manera más ágil.

La combinación de donaciones, préstamos y seguros climáticos en la estrategia de financiamiento de Santa Lucía ilustra un enfoque multifacético para abordar los retos del cambio climático, equilibrando la necesidad de recursos sustanciales con la gestión prudente de la carga financiera a largo plazo. A medida que Santa Lucía continúa avanzando en sus esfuerzos de acción climática, será crucial seguir explorando y optimizando el uso de diversos instrumentos financieros para asegurar la implementación de su NDC, al tiempo que se mantiene un manejo financiero sostenible y responsable. (Ver Figura 10).

Figura 10

Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Instrumento, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

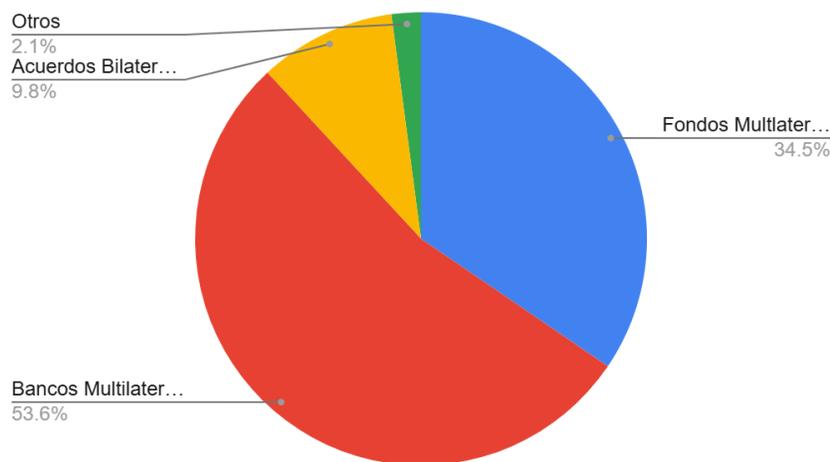
En relación a las fuentes de financiamiento, refleja un modelo diversificado de fuentes de financiamiento. El total de \$232,466,251 de dólares recibido durante este periodo se distribuye entre fondos multilaterales internacionales públicos, bancos multilaterales, acuerdos bilaterales, y organizaciones internacionales, subrayando la complejidad y la colaboración internacional en el financiamiento de la acción climática.

Los fondos multilaterales internacionales públicos, incluyendo el GCF, el GEF, el AF y el CIF, aportaron US\$80.123,548, representando el 34,5% del total del financiamiento climático. Por otro lado, los bancos multilaterales, específicamente el BM y el CDB, proveyeron US\$124.545.154, lo que constituye el 53,6% de los recursos financieros movilizados. Mientras que los acuerdos bilaterales, con países como Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Finlandia, e Italia, sumaron US\$22.792.273 , representando el 9,8% del financiamiento. Estos acuerdos destacan la cooperación directa entre naciones como un componente vital para el apoyo financiero en la acción climática, permitiendo intercambios más focalizados y adaptados a las necesidades específicas de Santa Lucía.

Además, las organizaciones internacionales, incluyendo el CCRIF, el Climate Technology Centre and Network (CTCN), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en colaboración con la NDC Partnership contribuyeron con US\$5.005.676 representando el 2,1% del total. Esta diversidad de fuentes resalta el rol de las organizaciones internacionales en proporcionar tanto financiamiento como apoyo técnico para el desarrollo e implementación de soluciones climáticas innovadoras. (Ver Figura 11).

Figura 11

Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Fuente, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

Ahora bien, pasando a los propósitos, la distribución de los fondos entre proyectos de mitigación y adaptación destaca un enfoque pragmático que reconoce tanto la contribución mínima de Santa Lucía a las emisiones globales de GEI como su alta vulnerabilidad a los impactos adversos del cambio climático.

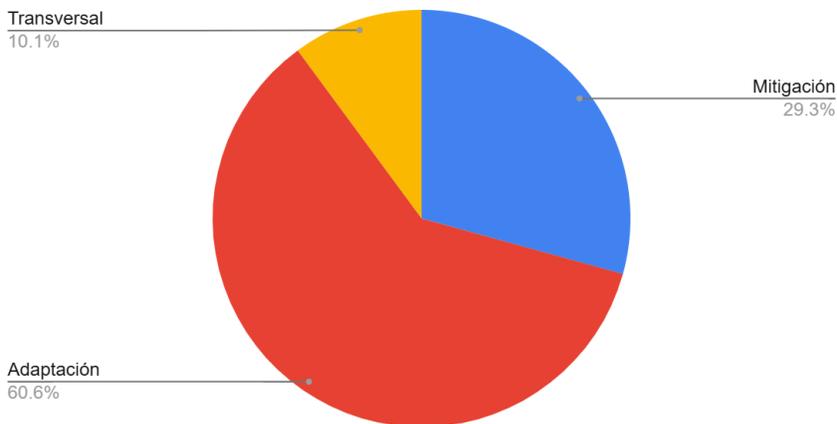
La asignación de US\$68.155.628 a proyectos de mitigación, representando el 29,3% del financiamiento climático recibido, subraya el compromiso de Santa Lucía con la reducción de emisiones de GEI, a pesar de su pequeña contribución a nivel global.

La mayor parte del financiamiento, US\$140.905.765 o el 60,6%, se destinó a proyectos de adaptación, poniendo de relieve la importancia de fortalecer la resiliencia de la isla frente a los efectos del cambio climático. Esta priorización de la adaptación es esencial para proteger los medios de vida, la infraestructura y los ecosistemas naturales de Santa Lucía, mejorando la capacidad de la isla para responder a eventos climáticos extremos y cambios a largo plazo.

Los proyectos transversales, que recibieron US\$23.405.258 y representaron el 10,1% del financiamiento climático, ilustran una aproximación integrada que busca sinergias entre la mitigación y la adaptación (Ver Figura 12).

Figura 12

Financiamiento Climático para Santa Lucía Por Propósito, 2016-2020



Fuente: Elaboración Propia

El análisis del co-financiamiento, que alcanzó el 16,7% del total, sugiere que, aunque hubo una participación significativa de diversas fuentes de financiamiento, existe un potencial para aumentar la sinergia y la colaboración financiera en proyectos futuros para maximizar el impacto de las intervenciones climáticas en Santa Lucía.

IV. Conclusiones

La movilización de recursos financieros para enfrentar el cambio climático en Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía durante el período 2016-2020 revela un complejo entrelazado de desafíos y esfuerzos innovadores. La vulnerabilidad de estas naciones insulares a eventos climáticos extremos, junto con las dificultades en acceder a fondos internacionales y la limitada capacidad técnica y administrativa para gestionar dichos fondos, resalta los obstáculos significativos en su lucha contra el cambio climático. Estas naciones han experimentado la devastación causada por huracanes y otros desastres naturales, lo que no solo subraya su vulnerabilidad sino también la necesidad urgente de un financiamiento climático robusto.

En el caso de Antigua y Barbuda, la asignación y gestión del financiamiento climático entre 2016 y 2020 demuestra un compromiso insuficiente con la implementación de su NDC, aunque sí se ha priorizado la adaptación climática como respuesta a su alto nivel de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la distribución del financiamiento revela áreas de oportunidad para una mayor alineación con los sectores específicos identificados en la NDC, particularmente en lo que respecta a la asignación de recursos hacia la salud y el turismo, que no recibieron financiamiento directo a pesar de su inclusión en la NDC.

La dependencia de Antigua y Barbuda en una mezcla equilibrada de donaciones y préstamos refleja una estrategia prudente que maximiza los recursos disponibles sin sobrecargar las finanzas nacionales. No obstante, la innovación en instrumentos financieros, como los seguros climáticos, aunque aún incipiente, presenta un potencial significativo para mejorar la resiliencia del país a los impactos climáticos.

La cooperación internacional, evidenciada por el apoyo de fondos multilaterales, bancos multilaterales y acuerdos bilaterales, es fundamental para el financiamiento climático de Antigua y Barbuda. Esta cooperación debe continuar y expandirse, enfocándose en aumentar la transparencia, la asignación suficiente de recursos, y la efectividad de los proyectos financiados para garantizar que los objetivos de mitigación y adaptación sean plenamente alcanzados.

El caso de Antigua y Barbuda sugiere la necesidad de una mayor integración de las estrategias de adaptación, junto con un enfoque más dirigido hacia la inversión en sectores subrepresentados y la exploración de nuevos instrumentos financieros. Mejorar la alineación del financiamiento climático con las prioridades nacionales, aumentar el co-financiamiento para proyectos estratégicos y fortalecer la capacidad de gestión y monitoreo son pasos críticos hacia

la optimización del impacto del financiamiento climático en Antigua y Barbuda, asegurando así la sostenibilidad ambiental, económica y social a largo plazo.

Por otro lado, el financiamiento climático en Dominica durante el período 2016-2020 ilustra un compromiso significativo con la acción climática, aunque está en gran parte alineado con las prioridades establecidas en su NDC para los proyectos de mitigación, se debe destacar que la NDC de Dominica, para efectos de adaptación, hace mucho énfasis en investigaciones y evaluaciones que se deben realizar para comprender los riesgos que se pueden enfrentar ante cualquier evento climático extremo y, por ende, no se hace ninguna referencia a proyectos de adaptación.

Sin embargo, es importante resaltar el paso del huracán María en el 2017 para comprender que el país no estaba preparado para verse afectado por dicho evento climático extremo, al menos en la primera mitad del periodo que representa la NDC. Ahora bien, la diversificación en la utilización de fondos, abarcando desde la energía renovable hasta proyectos multisectoriales, refleja una estrategia integral para la mitigación del cambio climático y la adaptación. La variedad de instrumentos financieros, junto con el apoyo de múltiples fuentes de financiamiento, destaca la complejidad y la necesidad de un enfoque colaborativo para enfrentar el cambio climático.

A medida que Dominica continúa avanzando en sus esfuerzos de acción climática, será crucial mantener y ampliar estas colaboraciones financieras, asegurando que los fondos sean suficientes para cumplir con los objetivos de mitigación y adaptación. La gestión estratégica del financiamiento climático, junto con la evaluación continua de las necesidades y prioridades, será fundamental para maximizar el impacto de estos recursos en la transformación hacia un desarrollo sostenible y resiliente al clima en Dominica.

Finalmente, el financiamiento climático en Santa Lucía refleja un enfoque estratégico y multifacético para abordar los desafíos del cambio climático, aunque no está completamente alineado con las prioridades establecidas en su NDC ya que solamente un 35% del financiamiento a proyectos climáticos se podría decir que lo está. La diversificación de los instrumentos financieros y la amplia gama de fuentes de financiamiento destacan un esfuerzo colaborativo y global para apoyar a Santa Lucía en sus iniciativas de mitigación y adaptación. A medida que la isla continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales y de seguimiento para la gestión del financiamiento climático, es esencial mantener el enfoque en la ampliación del co-financiamiento y en la implementación de proyectos que aborden tanto la mitigación como la adaptación de manera integrada. La colaboración internacional y la movilización de recursos

adicionales serán cruciales para asegurar que Santa Lucía pueda alcanzar sus objetivos climáticos, fomentando un desarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático.

El desarrollo de arreglos institucionales y sistemas de seguimiento MRV subraya el compromiso de Santa Lucía con una gestión práctica del financiamiento climático y la implementación de proyectos. Estos esfuerzos buscan mejorar la recopilación, evaluación y gestión de la información sobre el apoyo y financiamiento de acciones climáticas, lo que es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de las intervenciones financiadas.

Ahora bien, a escala regional, es importante destacar que a pesar de la complejidad y la burocracia asociadas con el acceso a fondos internacionales, se han adoptado medidas innovadoras, incluyendo programas que capitalizan sobre inversiones directas para la resiliencia climática. Además, la creación de entidades dedicadas a mejorar la coordinación y ejecución de proyectos de resiliencia y reconstrucción climática ha sido crucial y la colaboración regional e internacional ha permitido a estos países complementar sus capacidades y recursos internos con apoyo externo, jugando un papel fundamental en la gestión de estos recursos.

Para mejorar el acceso y la gestión del financiamiento climático, es importante fortalecer las capacidades nacionales en planificación y ejecución de proyectos climáticos, fomentar la cooperación regional para compartir conocimientos y recursos, e innovar en mecanismos de financiamiento. Simplificar el acceso a fondos climáticos internacionales y alinear mejor los proyectos locales con los objetivos de sostenibilidad global son pasos críticos para alcanzar la suficiencia del financiamiento climático. Adoptar una estrategia multifacética que incluye la mejora de marcos regulatorios para atraer inversiones, el desarrollo de proyectos atractivos para el interés financiero privado y la promoción de asociaciones público-privadas es esencial. Además, implementar sistemas de monitoreo y evaluación robustos garantiza la transparencia y rendición de cuentas, atrayendo más apoyo financiero.

Aunque se ha demostrado que los proyectos están limitadamente alineados con las necesidades y objetivos establecidos en las NDC de estos tres países, la magnitud del financiamiento climático aún no satisface las estimaciones de las necesidades financieras reales. Esta brecha financiera subraya la urgencia de incrementar los esfuerzos para movilizar recursos adicionales, tanto a nivel internacional como mediante la innovación en mecanismos de financiamiento locales, para cerrar la brecha entre los fondos disponibles y los requerimientos estimados para una acción climática útil.

Por otro lado, sería deseable que futuras investigaciones puedan realizar un análisis de alineamiento de las NDC actualizadas de estos países, para indagar si los países han podido

dirigir los esfuerzos de financiamiento hacia las áreas prioritarias de forma más coordinada. Esto es así, ya que cabe la posibilidad de que algunos de los proyectos que han sido aprobados y financiados a través de las diversas fuentes internacionales en el periodo estudiado no estuvieran debidamente alineados ya que se pueden haber negociado al mismo tiempo que la NDC estaba siendo desarrollada.

La experiencia de estos países subraya la necesidad de adaptabilidad, colaboración e innovación en la gestión del financiamiento climático. Aunque los desafíos son considerables, las estrategias implementadas ofrecen un camino hacia una gestión más sólida y justa del financiamiento climático, crucial para la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo de las economías insulares en desarrollo frente al cambio climático. La adaptación a las realidades locales y la búsqueda de soluciones innovadoras pueden servir de modelo para otras regiones que enfrentan retos similares, destacando la importancia de un enfoque coordinado y global en la lucha contra el cambio climático. La brecha financiera existente demanda una acción urgente para asegurar que los esfuerzos de mitigación y adaptación no solo estén alineados con las metas nacionales sino que también sean respaldados por los recursos necesarios para que estos sean suficientes para su implementación.

Bibliografía

Acevedo, S. (2016). Gone with the Wind: Estimating Hurricane and Climate Change Costs in the Caribbean. IMF Working Paper WP/16/199. International Monetary Fund. pp. 3-12. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16199.pdf>

Motty, M., & Ackom, E. (s.f.). Climate Finance: Unlocking Funds Toward Achievement of Climate Targets Under the Paris Agreement. pp. 2-9 Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/334196400_Climate_Finance_Unlocking_Funds_Toward_Achievement_of_Climate_Targets_Under_the_Paris_Agreement

Alayza, N. (2023). Untangling the finance goal: An introduction to the new collective quantified goal. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute. pp. 3-10. Recuperado de <https://www.wri.org/research/untangling-finance-goal-introduction-new-collective-quantified-goal>

Atteridge, A., et al. (2017). Climate Finance in the Caribbean region's Small Island Development States. Stockholm Environment Institute. pp. 31-32, 37-38, 48-49, 74-75. Recuperado de <https://www.sei.org/publications/caribbean-climate-finance/>

Batra, G., Uitto, J. I., & Feinstein, O. N. (2022). Environmental evaluation and global development institutions: A case study of the global environment facility. OAPEN. pp. 13-20. Recuperado de <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50908/1/9781000481945.pdf>

Bowman, M., & Minas, S. (2019). Resilience through interlinkage: The Green Climate Fund and climate finance governance. *Climate Policy*, 19(6), 682-694. pp. 342-353. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/327787070>

Buchner, B., Clark, A., Falconer, A., Macquarie, R., Meattle, C., Tolentino, R., & Wetherbee, C. (2019). Global Landscape of Climate Finance 2019. Climate Policy Initiative. pp. 2-18, 23-26. Recuperado de <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-Global-Landscape-of-Climate-Finance.pdf>

Caribbean Development Bank. (2019). Road Improvement and Maintenance Project – Saint Lucia. Recuperado de <https://www.caribank.org/projects/road-improvement-maintenance-project-saint-lucia>

CCRIF SPC. (2020). Annual Report 2019/2020. Recuperado de <https://www.ccrif.org/publications/annual-report/ccrif-spc-annual-report-2019-20>

Chawla, K., & Ghosh, A. (2019). Greening new pastures for green investments. Council on Energy, Environment and Water. pp. 1-8. Recuperado de <https://www.ceew.in/sites/default/files/CEEW-Greener-Pastures-for-Green-Investments-20Sep19.pdf>

Chebly, J. E., Mancini, M., Henderson, I., & Zadek, S. (2018). Aligning climate finance to the effective implementation of NDCs and to LTSs. United Nations Environment Programme. pp. 3-12. Recuperado de

https://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2018/10/Aligning_Climate_Finance_to_the_effective_implementation_of_NDCs_and_to_LTSs.pdf

Cochran, I., & Pauthier, A. (2019). A framework for alignment with the Paris Agreement: why, what and how for financial institutions. Institute for Climate Economics: París, Francia. pp. 4-9, 12-18.

Recuperado de

https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE%E2%80%A2Framework_Alignment_Financial_Paris_Agreement_52p.pdf

CS Global Partners Limited. (2023). Dominica: World's first climate-resilient nation? (2023).

Recuperado de <https://csglobalpartners.com/dominica-worlds-first-climate-resilient-nation/>

Dimond, V. (2023). What Could World Bank Reforms Mean for Climate-Vulnerable Small Island Developing States? Center for Global Development. Recuperado de

<https://www.cgdev.org/blog/what-could-world-bank-reforms-mean-climate-vulnerable-small-island-developing-states>

Eckstein, D., Hutfils, M.-L., & Wings, M. (2019). Global Climate Risk Index 2019: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2017 and 1998 to 2017.

Germanwatch. Recuperado de

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf

Eckstein, D., Künzel, V., & Schäfer, L. (2017). Global Climate Risk Index 2017: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2015 and 1996 to 2015.

Germanwatch. Recuperado de

<https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/16411.pdf>

Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L., & Wings, M. (2021). Global Climate Risk Index 2021: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2019 and 2000 to 2019. Germanwatch. Recuperado de

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf

Fatica, S., Panzica, R., & Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: Are financial institutions special? Journal of Financial Stability. Elsevier. Recuperado de

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572308921000334>

Ferreira, P. G. (2018). Climate Finance and Transparency in the Paris Agreement. CIGI Papers No. 195, pp. 1-11. Recuperado de

https://www.cigionline.org/static/documents/documents/Paper%20no.195_1.pdf

Ferris, N. (2023). Top Ten countries with the most rapid renewable power transitions. Energy Monitor. Recuperado de <https://www.energymonitor.ai/renewables/the-top-ten-countries-undergoing-the-most-rapid-renewable-power-transitions/?cf-view>

FRED- St. Louis Economic Research. (2023). Gross national income for Antigua and Barbuda. Recuperado de <https://fred.stlouisfed.org/series/MKTGNIAGA646NWDB>

Gabor, D. (2021). *The Wall Street Consensus*. UWE Bristol. pp. 2-11. Recuperado de <https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/download>

Gastelumendi, J., & Gnittke, I. (2016). Climate Finance (Article 9).

Gobierno de Antigua y Barbuda. (2020). Antigua and Barbuda's First Biennial Update Report. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Antigua%20and%20Barbuda%20-%20UNFCCC%20Biennial%20Update%20Report%201%20-%20Final.pdf>

Gobierno de Antigua y Barbuda. (2015). Antigua and Barbuda Intended Determined Contribution (INDC). Recuperado de https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Antigua%20and%20Barbuda/1/INDC_Antigua_Barbuda.pdf

Gobierno de Antigua y Barbuda. (2021). Antigua and Barbuda Updated Nationally Determined Contribution. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ATG%20-%20UNFCCC%20NDC%20-%202021-09-02%20-%20Final.pdf>.

Gobierno de Dominica. (2020). Dominica Country Programme for the GCF 2020-2027. Recuperado de https://planning.gov.dm/images/Other_PDF/GCF_Country_Program_2021.pdf.

Gobierno de Dominica. (2015). Intended Nationally Determined Contribution of the Commonwealth of Dominica. Recuperado de <https://faolex.fao.org/docs/pdf/dmi187055.pdf>

Gobierno de Dominica. (2022). Updated Nationally Determined Contribution. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/2022-07/The%20Commonwealth%20of%20Dominica%20updated%20NDC%20July%204%20%2C.pdf>

Gobierno de Santa Lucía. (2015). Saint Lucia Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Recuperado de <https://www.ccchina.org.cn/archiver/ccchinaen/UpFile/Files/Default/20151125135904938534.pdf>

Gobierno de Santa Lucía. (2020). Saint Lucia's Climate Financing Strategy under the national adaptation planning process. Departamento de Desarrollo Sostenible. pp. 3-19.
<https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/napgn-en-2020-Saint-Lucias-Climate-Financing-Strategy.pdf>

Gobierno de Santa Lucía. (2021). Saint Lucia's First Biennial Update Report. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Saint%20Lucia%20BUR.pdf>

Gobierno de Santa Lucía. (2021). Updated Nationally Determined Contribution. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Saint%20Lucia%27s%20Final%20BUR%20revised%20Dec%202021.pdf>

Hagenlocher, M., Cotti, D., Cissé, J. D., & Garschagen, M. (2020). Disaster risk and readiness for insurance solutions in Small Island Developing States. ResearchGate. pp. 12-37. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/346824362_Disaster_risk_and_readiness_for_insurance_solutions_in_small_island_developing_states

Hart, S. (2013). A Regional Perspective on Climate Finance – The Caribbean Community. Recuperado de https://unfccc.int/files/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/application/pdf/001.pdf

Iacobuță, G. I., Brandi, C., Dzebo, A., & Duron, S. (2022). Aligning climate and sustainable development finance through an SDG lens. *Global Environmental Change*, 74, 102509. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378022000474>

Iberdrola. ¿Qué es la Financiación Climática? Recuperado de <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-financiacion-climatica>

ICLEI. Glosario de Financiamiento Climático. Recuperado de <https://americadosul.iclei.org/wp-content/uploads/sites/78/2021/04/glossario-tap-es-v4.pdf>

IISD. (2022). Multilateral Development Banks and Climate Finance: More Words Than Action. Recuperado de <https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/multilateral-development-banks-and-climate-finance-more-words-than-action/>

IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. Recuperado de <https://www.ipcc.ch/sr15/>

Jaffe, A., Newell, R., & Stavins, R. (2005). A tale of two market failures: Technology and environmental policy. *Ecological Economics*. pp. 164–174. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.027>

Kalaidjian, E., & Robinson, S. (2022). Reviewing the nature and pitfalls of multilateral adaptation finance for small island developing states. *Environmental Science & Policy*. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096322000390>

Keohane, R., & Victor, D. (2010). The Regime Complex for Climate Change. *Perspectives on Politics*, 8(1), pp. 2-8, 13-17, 21-24. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/228212111_The_Regime_Complex_for_Climate_Change

Keohane, R., & Grant, R. (2005). Accountability and Abuses of Power in World Politics. *American Political Science Review*, 99(1), pp. 29-43. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/231787956_Accountability_and_Abuses_of_Power_in_World_Politics

Khan, M. (2016). Climate Change, Adaptation and International Relations Theory. Recuperado de <https://www.e-ir.info/2016/04/29/climate-change-adaptation-and-international-relations-theory/>

Klein, R., & Möhner, A. (2011). The Political Dimension of Vulnerability: Implications for the Green Climate Fund. *IDS Bulletin*. pp. 15-20. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/230348437_The_Political_Dimension_of_Vulnerability_Implications_for_the_Green_Climate_Fund

Kumar, S. (2022). A quest for sustainium (sustainability Premium): Review of sustainable bonds. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. pp. 1-18. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/358116976>

Linnerooth-Bayer, J., & Mechler, R. (2009). Insurance Against Losses from Natural Disasters in Developing Countries. *Journal of Environmental and Development Economics*. pp. 3-11. Recuperado de https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_bg_papers/bp_wess2008_mechler.pdf

Martínez-Díaz, L., Sidner, L., & McClamrock, S. (2019). The future of disaster risk pooling for developing countries: Where do we go from here? *World Resources Institute*. pp. 1-11, 16-39. Recuperado de <https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/The-Future-of-Disaster-Risk-Pooling-for-Developing-Countries.pdf>

- Matemilola, S., Fadeyi, O., & Sijuade, T. (2020). Paris Agreement. En Encyclopedia of Sustainable Development. pp. 2-4. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/344224160_Paris_Agreement
- MacAskill, S., Roca, E., Liu, B., Stewart, R. A., & Sahin, O. (2021). Is there a green premium in the green bond market? Systematic literature review revealing premium determinants. *Journal of Cleaner Production*, 256, 124491, pp. 3-10. Recuperado de <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124491>
- Mohan, P. S. (2022). Implementing nationally determined contributions under the Paris Agreement: an assessment of climate finance in Caribbean small island developing states. *Climate Policy*. Recuperado de <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2022.2101978>
- Mohan, P. S. (2023a). Financing climate change mitigation and adaptation in Caribbean SIDS. *PLOS Climate*, 2(3). Recuperado de <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000167>
- Mohan, P. S. (2023b). Financing needs to achieve Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement in Caribbean Small Island Developing States. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 28, Article 26. Recuperado de <https://doi.org/10.1007/s11027-023-10062-9>
- Morales, A. (2016). El Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas en el Acuerdo de París: Un nuevo régimen de cambio climático justo y efectivo. *Universidad de los Andes*. pp. 2-13. Recuperado de <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/720e141f-f546-4bcc-94f8-4dff8c0511a7/content>
- Nakhooda, S., Watson, C., & Schalatek, L. (2016). *The Global Climate Finance Architecture. Climate Finance Fundamentals*, Heinrich Böll Stiftung North America. Recuperado de https://us.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/11/cff2_2016_architecture_english.pdf
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). *The Politics of the Carbon Economy*. Cambridge University Press. pp. 77-96. Recuperado de <https://books.google.com.pr/books?id=xHesAgAAQBAJ>
- Northrop, E., Biru, H., Lima, S., Bouye, M., & Song, R. (2016). Examining the alignment between the intended nationally determined contributions and sustainable development goals. *World Resources Institute*. pp. 1-10, 45-53. Recuperado de https://www.cac.int/sites/default/files/WRI_INDCs_v5.pdf
- Nurse, L. A., McLean, R. F., Agard, J., Briguglio, L. P., Duvat-Magnan, V., Pelesikoti, N., Tompkins, E., & Webb, A. (2014). Small islands. In *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. pp. 1614-1654.

Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/272791502_Chapter_29_Small_islands_In_Climate_Change_2014_Impacts_Adaptation_and_Vulnerability_Part_B_Regional_Aspects_Contribution_of_Working_Group_II_to_the_Fifth_Assessment_Report_of_the_Intergovernmental_Pa

Nyekwere, E. H. (2017). International environment financing: A review of the global environment facility. *Groningen Journal of International Law*, 5(2). pp. 279-295. Recuperado de <https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/download/31068/28377>

OCDE. (2021). The Annual Climate Action Monitor: Helping Countries Advance Towards Net Zero. pp. 3-10, 18-34. Recuperado de <https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/5bcb405c-en.pdf>

Okereke, C., & Coventry, P. (2016). Climate justice and the international regime: Before, during, and after Paris. *WIREs Climate Change*, 7(6), pp. 2-15. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/305340376_Climate_justice_and_the_international_regime_before_during_and_after_Paris_Climate_justice_and_the_international_regime

Pauw, W. P., König, M., Sadikhova, K., & Stutzmann, T. (2021). Financing Low-Carbon and Climate Resilient Development: Do countries integrate Article 2.1 (c) of the Paris Agreement in their long-term strategies? Frankfurt School-UNEP Centre. pp. 1-7, 18-30. Recuperado de https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2021/12/Report_Long_term_strategies_21122_1.pdf

Roberts, J., & Parks, B. (2008). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North–South Politics, and Climate Policy*. The MIT Press, pp. 409-412. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/226602673_J_Timmons_Roberts_and_Bradley_C_Parks_A_Climate_of_Injustice_Global_Inequality_North-South_Politics_and_Climate_Policy

Roberts, J. T., & Weikmans, R. (2017). Postface: Fragmentation, Failing Trust and Enduring Tensions over What Counts as Climate Finance. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 17(1), 130-135. Recuperado de <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Fragmentation%20failing%20trust%20and%20enduring.pdf>

Robinson, S. (2018). Adapting to climate change at the national level in Caribbean small island developing states. *Island Studies Journal*, 13(1), pp. 79-100. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/324891760_Adapting_to_climate_change_at_the_national_level_in_Caribbean_small_island_developing_state

Rustomjee, C. (2016). Developing the blue economy in the Caribbean and other small states. CIGI Policy Brief No. 75, pp. 2-4. Recuperado de https://www.cigionline.org/sites/default/files/pb_no.75web_1.pdf

Saunders, N. (2019). Climate change adaptation finance: Are the most vulnerable nations prioritised? Stockholm Environment Institute. pp. 5-26. Recuperado de <https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/04/climate-change-adaptation-finance-are-the-most-vulnerable-nations-prioritised.pdf>

Schalatek, L., & Bird, N. (2016). The principles and criteria of public climate finance: A normative framework. Climate Finance Fundamentals, Heinrich Böll Stiftung North America. Recuperado de <https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2024/04/CFF1-2024-ENG-Normative-Framework-DIGITAL.pdf>

Scott, C. (2022). ¿Cómo pueden las instituciones de microfinanzas ayudar a sus clientes a desarrollar resiliencia climática? Recuperado de <https://www.findevgateway.org/es/blog/2022/06/como-pueden-las-instituciones-de-microfinanzas-ayudar-sus-clientes-desarrollar>

Scandurra, G., Thomas, A., Passaro, R., Bencini, J., & Carfora, A. (2020). Does climate finance reduce vulnerability in Small Island Developing States? An empirical investigation. Journal of Cleaner Production, 256, Article 120330, pp. 1-10. Recuperado de <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120330>

Streck, C., Keenlyside, P., & Von Unger, M. (2016). The Paris Agreement: A new beginning. Journal of European Environmental & Planning Law. pp. 3-29. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Charlotte-Streck-2/publication/301665855_The_Paris_Agreement_A_New_Beginning/links/5c25567d92851c22a34a3962/The-Paris-Agreement-A-New-Beginning.pdf

Sun, R. S., Gao, X., Deng, L. C., & Wang, C. (2022). Is the Paris rulebook sufficient for effective implementation of the Paris Agreement? Advances in Climate Change Research, 13(3). Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927822000594>

Thomas, A., et al. (2020). Climate Change and Small Island Developing States. Recuperado de <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-012320-083355>

Thwaites, J., Elliott, C., Levin, K., & Taraska, G. (2017). Designing the Enhanced Transparency Framework Part 1: Reporting Under the Paris Agreement. World Resources Institute, pp. 1-8, 11-16, 21-25. <https://www.wri.org/publication/pact-reporting-under-paris-agreement>

UNCTAD. (2021). Alternative Developing Strategies for SIDS: Building Competitiveness in New Industries. pp. 1-11, 47-50. Recuperado de https://unctad.org/system/files/official-document/aldcinf2021d2_en.pdf

UNFCCC. (2009). Introduction to Climate Finance. Recuperado de <https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance>

UNFCCC. (2015). Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change. Recuperado de <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

UNFCCC. (2016). Nationally Determined Contributions (NDCs). United Nations Framework Convention on Climate Change. Recuperado de <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry>

UNFCCC. (2021). Approaches to reviewing the overall progress made in achieving the global goal on adaptation. pp. 5-13, 21-33. Recuperado de https://unfccc.int/sites/default/files/resource/AC_TP_GlobalGoalOnAdaptation.pdf

UNFCCC RCC St. George's. (2021). NDC Survey Report: Caribbean Region. pp. 7-18. Recuperado de https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NDC%20Survey%20Report%202020-Caribbean_Jan_2021.pdf

UNFCCC Standing Committee on Finance. (2014). 2014 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows Report. Recuperado de http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf

United Nations. (1992). About Small Island Developing States. Recuperado de <https://www.un.org/ohrls/content/about-small-island-developing-states>

United Nations. (2017). UN chief lauds Dominica's vision to become first climate-resilient nation after recent devastation. Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/10/un-chief-lauds-dominicas-vision-to-become-first-climate-resilient-nation-after-recent-devastation/>

United Nations. (2022). Accessing Climate Finance: Challenges and Opportunities for Small Island Developing States. pp. 5-12, 21-35. Recuperado de https://www.un.org/ohrls/sites/www.un.org.ohrls/files/accessing_climate_finance_challenges_sids_report.pdf

Watson, C. (2016). Financing our shared future: navigating the humanitarian, development and climate finance agendas. ODI Report. Watson, C. (2016). Pp. 2-11. Recuperado de <https://odi.org/en/publications/financing-our-shared-future-navigating-the-humanitarian-development-and-climate-finance-agendas/>

Weikmans, R., van Asselt, H., & Roberts, T. (2021). Transparency requirements under the Paris Agreement and their (un)likely impact on strengthening the ambition of nationally determined contributions (NDCs). En M. Tignino & G. Perruso (Eds.), Making Climate Action More Effective: Lessons from the UNFCCC Process. Taylor & Francis, pp. 2-13.

<https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Weikmans%20van%20Asselt%20%20Roberts%20%282019%29%20Transparency.pdf>

Winkler, H., Mantlana, B., & Letete, T. (2017). Transparency of Action and Support in the Paris Agreement. *Climate Policy*, 17(1), pp. 3-12. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Thapelo-Letete/publication/316020661_Transparency_of_action_and_support_in_the_Paris_Agreement/links/5b42fdeba6fdccbcf90db8cc/Transparency-of-action-and-support-in-the-Paris-Agreement.pdf

Pauw, W. P., Castro, P., Pickering, J., & Bhasin, S. (2019). Conditional nationally determined contributions in the Paris Agreement: foothold for equity or Achilles heel?. *Climate Policy*, 19(6). Recuperado de <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1635874>

World Economic Forum (WEF). (2013). The Green Investment Report: The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth. pp. 5-11, 18-25. Recuperado de https://www3.weforum.org/docs/WEF_GreenInvestment_Report_2013.pdf

Xie, L., Scholtens, B., & Homroy, S. (2023). Rebalancing climate finance: Analyzing multilateral development banks' allocation practices. *Energy Research & Social Science*, 101, Article 103127. pp. 1-4, 11-15. Recuperado de https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/671881721/1_s2.0_S2214629623001871_main.pdf

Anexos

Anexo 1- Listado de Entrevistados

Nombre	Institución	Cargo	Modalidad	Día
Camaria Holder	Antigua y Barbuda- PNUMA	Consultora	Correo Electrónico	6 de agosto de 2023
Derek Gibbs	Banco de Desarrollo del Caribe	Especialista en Financiamiento Climático	Virtual	9 de agosto de 2023
Jessica Jacob	Sureco and Partners	CEO	Virtual	29 de mayo de 2023
Jevanic Henry	Naciones Unidas	Asesor Juvenil del Secretario General de la ONU sobre Cambio Climático	Virtual	2 de noviembre de 2023
Kimisha Thomas	Ministerio de Medio Ambiente de Dominica	Asesora de Políticas	Virtual	31 de agosto de 2023
Nella Canales	Stockholm Environment Institute	Investigadora	Virtual	11 de agosto de 2023
Rashauna Adams-Matthews	Departamento de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda	Negociadora de Cambio Climático	Correo Electrónico	11 de agosto de 2023
Samuel Carrete	Agencia de Ejecución de la Resiliencia Climática	Consultor de Desarrollo y Planificación de Resiliencia	Virtual	31 de mayo de 2023
Ulric Trotz	Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe	Director	Virtual	29 de julio de 2023
Vekash Khan	Departamento de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda	Oficial Técnico	Virtual	8 de septiembre de 2023

Anexo 2- Listado de Proyectos por País

Antigua y Barbuda							
Nombre de proyecto	Cantidad	Co-Financiamiento	Año	Fuente	Instrumento	Proposito	Sector
Integrated physical adaptation and community resilience through an enhanced direct access pilot in the public, private, and civil society sectors of three Eastern Caribbean small island developing states	\$6.700.000,00	\$856.473,00	2016	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
A blueprint for adapting road infrastructure to projected climate extremes in Antigua and Barbuda	\$27.000.000,00	\$15.000.000,00	2016	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	Infraestructura
Technical Assistance Grant for ESP and Gender Policy	\$250.000,00	\$0,00	2016	Adaptation Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Building climate resilience through innovative financing mechanisms for climate change adaptation	\$5.000.000,00	\$0,00	2016	Special Climate Change Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$0,00	\$12.900.000,00			Préstamo		
Transformation of the water and government sectors using renewable energy	\$15.000.000,00	\$2.700.000,00	2016	Abu Dhabi Fund for Development	Préstamo	Mitigación	Energía
Second Road Infrastructure Rehabilitation	\$65.627.000,00		2016	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
The Project for Development of Agriculture Education through Aquaponics	\$91.400,00	\$0,00	2016	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	AFOLU
The Project for Improvement of Fishery Equipment and Machinery in Antigua and Barbuda	\$4.820.000,00	\$0,00	2016	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Marítimo
Resilience to hurricanes in the building sector in Antigua and Barbuda	\$32.706.595,00	\$13.458.035,00	2017	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	Infraestructura
An integrated approach to physical adaptation and community resilience in Antigua and Barbuda's northwest McKinnon's watershed	\$9.970.000,00	\$0,00	2017	Adaptation Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
Electric Bus Pilot Project	\$625.000,00	\$0,00	2017	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Transporte
Sustainable Energy for the Eastern Caribbean: Street lighting project	\$5.000.000,00	\$0,00	2017	Caribbean Development Bank	Préstamo	Mitigación	Energía
	\$0,00	\$1.000.000,00			Donación		
Solar Photovoltaic RE Systems (IDB-SEF)	\$1.450.000,00	\$0,00	2017	Caribbean Development Bank	Préstamo	Mitigación	Energía
NDM-RRL Hurricane Irma	\$34.523.000,00		2017	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
CCRIF SPC Payouts: Tropical Cyclone Irma	\$6.794.875,00	\$0,00	2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
Payments Under the TC/EQ Aggregate Deductible Cover (ADC): Tropical Cyclone Maria	\$32.400,00	\$0,00	2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
	\$9.400,00	\$0,00	2017	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
	\$13.500,00	\$0,00	2017	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
Relieving damages of hurricane in Antigua and Barbuda	\$51.200,00	\$0,00	2017	Bilateral-Corea	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$15.800.000,00	\$0,00	2017	Bilateral- Emiratos Arabes Unidos	Préstamo	Mitigación	Energía
Hybrid Solar and Wind Power Project	\$3.160.000,00	\$0,00			Donación		
Huracan Irma a su paso por el Caribe	\$31.500,00	\$0,00	2017	Bilateral-España	Donación	Transversal	Multisectorial
Sustainability Energy Facility Program	\$1.095.890,00		2018	GEF Trust Fund	Donación	Mitigación	Energía
Capacity Building for Improved Transparency on Climate Actions through an Environment Registry in Antigua & Barbuda	\$55.200,00		2018	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
B-Envelope after Irma hurricane. Housing Support to Barbuda	\$6.270.000,00		2018	Union Europea	Donación	Adaptación	Infraestructura
Grid-Interactive Solar PV Systems for Schools and Clinics	\$825.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Energía
Construction of Wind Turbine Bases	\$3.000.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Energía
	\$11.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Transversal	Multisectorial
	\$12.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
	\$14.170,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
The Economic and Social Development Programme	\$2.000.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Transversal	Multisectorial
	\$11.500,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
Supporting Renewable Energy and Energy Efficiency in the Caribbean (EcoMicro)	\$87.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Canadá	Donación	Mitigación	Energía
Canada Caribbean Resilience Facility	\$8.572.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	Multisectorial
Monitoring and Assessment of MEA Implementation and Environmental Trends in Antigua and Barbuda	\$880.000,00	\$900.000,00	2019	GEF Trust Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Capacity Building for Improved Transparency on Climate Actions through an Environment Registry in Antigua & Barbuda	\$1.104.000,00	\$200.000,00	2019	GEF Trust Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Global Programme to Support Countries with the Shift to Electric Mobility.	\$3.640.000,00		2019	GEF Trust Fund	Donación	Mitigación	Transporte
Green Barbuda Project	\$3.500.000,00	\$0,00	2019	Bilateral- Nueva Zelanda/ Abu Dhabi Fund for De	Donación	Transversal	Energía
Reconstruction and Rehabilitation Grant - Barbuda Energy Resilience Project	\$2.516.535,00		2019	Caribbean Development Bank	Préstamo	Transversal	Energía
Progressing a sustainable marine economy: Protection and sustainable development of Antigua and Barbuda's blue resources	\$38.300,00	\$0,00	2019	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Marítimo

	\$8.600,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$11.600,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
Grid Interactive Solar PV-Systems of Schools and Clinics in Antigua	\$538.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Energía
The Project for the Development of Agriculture Education through Hydroponics	\$72.200,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	AFOLU
Payments Under the TC/EQ Aggregate Deductible Cover (ADC): Tropical Cyclone Laura	\$70.257,00	\$0,00	2020	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
	\$12.400,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japon	Donación	Mitigación	AFOLU
Progressing a sustainable marine economy: Protection and sustainable development of Antigua and Barbuda's blue resources	\$36.100,00	\$0,00	2020	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Marítimo
Compete Caribbean Partnership Facility	\$7.750,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
	\$356.300,00	\$0,00	2020	Bilateral-Irlanda	Donación	Adaptación	Multisectorial
The Economic and Social Development Programme	\$903.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Residuos
Climate Change Action for Gender-Sensitive Resilience	\$158.300,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
Electric School Bus Pilot in Antigua	\$291.000,00	\$0,00	2020	Bilateral- Italia	Donación	Transversal	Transporte
The Project for the Construction of Hospitality Training Facility at Gilbert Agricultural & Rural Development Center	\$89.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	AFOLU
TCPF: Rebuilding the resilience of agriculture sector and livelihoods of Barbudans affected by Hurricane Irma	\$35.000,00		2020	FAO	Donación	Adaptación	AFOLU
Co-Total	US\$270.652.972,00	US\$47.014.508,00					
Total	US\$317.667.480,00						

Dominica							
Nombre de proyecto	Cantidad	Co-Financiamiento	Año	Fuente	Instrumento	Proposito	Sector
Low Carbon Development Path Promoting Energy Efficient Lighting and Solar Photovoltaic Technologies	\$1.730.000,00	\$8.940.000,00	2016	GEF	Donación	Mitigación	Energía
	\$13.330.000,00	\$0,00			Donación	Mitigación	
Sustainable Energy Facility for the Eastern Caribbean	\$0,00	\$18.740.477,00	2016	Green Climate Fund	Préstamo	Mitigación	Energía
Scoping visit to support post storm reconstruction in Dominica	\$30.500,00	\$0,00	2016	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Multisectorial
Support to the Dominican Solid Waste Management Corporation for the operationalisation of a PET shredder in the aftermath of tropical storm Erika	\$54.700,00	\$0,00	2016	Bilateral-Suiza	Donación	Mitigación	Residuos
South-South Cooperation Grant	\$50.000,00	\$0,00	2017	Adaptation Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
Geothermal Risk Mitigation	\$10.470.000,00		2017	Climate Investment Fund	Préstamo	Mitigación	Energía
GCF Readiness and Preparatory Support in Dominica	\$460.000,00	\$0,00	2017	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
CCRIF SPC Payouts: Tropical Cyclone Maria	\$19.294.800,00		2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
CCRIF SPC Payouts: Dominica - Excess Rainfall policy	\$1.054.022,00	\$0,00	2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
Storage Batteries for Renewables Sources Project at Fond Cole in Dominica Island	\$3.160.000,00		2017	Bilateral-Emiratos Arabes Unidos	Donación	Mitigación	Energía
Integrated physical adaptation and community resilience through an enhanced direct access pilot in the public, private, and civil society sectors of three Eastern Caribbean small island developing states	\$6.700.000,00	\$856.473,00	2018	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
<u>Dominica / EU Renewable Energy and Energy Efficiency</u>	\$3.085.000,00		2018	Unión Europea	Donación	Mitigación	Energía
Dominica Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project	\$25.000.000,00		2018	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	AFOLU
Climate Resilience and Restoration - Hurricane Maria (DDRRF)	\$7.564.000,00	\$0,00	2018	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
Third Phase Disaster Vulnerability Reduction for Dominica	\$28.630.000,00		2018	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
Hoursing Recovery Project	\$17.770.000,00		2018	Unión Europea	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
Dominica Disaster Recovery and Resilience	\$2.340.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	Multisectorial
Supporting Renewable Energy and Energy Efficiency in the Caribbean (EcoMicro)	\$90.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Canadá	Donación	Mitigación	Energía
The Project for the Renovation of Hurricane Shelters	\$70.500,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Infraestructura
Immediate post-emergency reconstruction and rehabilitation	\$25.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Francia	Donación	Adaptación	Multisectorial
Transition Office for the Climate Resilience Agency of Dominica (CREAD)	\$522.700,00	\$0,00	2018	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Multisectorial
Geothermal Risk Mitigation	\$27.000.000,00		2019	Banco Mundial	Préstamo	Mitigación	Energía
The Economic Feasibility Analysis of a Geothermal Based Green Industrial Eco park in the Commonwealth of Dominica, and Geothermal Resources Mapping in the Northern geothermal zone in the region near the town of Portsmouth	\$750.000,00	\$0,00	2019	Green Climate Fund	Donación	Mitigación	Energía
Support to the Climate Resilience Execution Agency of Dominica (CREAD)	\$2.306.400,00	\$0,00	2019	Bilateral-Canadá	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
Renforcement de la resilience du service public d'Tclairage photovoltaïque	\$296.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Francia	Donación	Transversal	Energía
Support to the Development of Dominica's Climate Resilience and Recover Plan	\$87.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Canadá	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
Installation of a Renewable Energy Powered Back-Up Water Supply System for the City of Roseau in Dominica	\$82.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Energía
Installation of a 75 KW grid-tied with battery backup Solar PV System at the DOWASCO Sewer Treatment Plant	\$80.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Energía
Operationalisation of the Climate Resilience Execution Agency of Dominica	\$1.220.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Multisectorial
Hurricane preparedness program for Dominica	\$1.295.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-USA	Donación	Adaptación	Multisectorial
Oversight of implementation support to the Climate Resilience Execution Agency of Dominica and DFID investments in Dominica	\$147.800,00	\$0,00	2019	Bilateral-UK	Donación	Adaptación	Multisectorial
Skills to Access the Green Economy	\$1.770.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
Delivery of operational framework for the establishment of a national fund to facilitate investments in green industrial eco parks, renewable energy, blue economy, energy efficiency and low carbon climate resilient projects in Dominica	\$290.000,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Energía
Low Carbon Transport Dominica	\$274.417,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Mitigación	Transporte
Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Technical Assistance (TA) Facility	\$440.476,00	\$226.190,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Global Subnational Climate Fund (SnCF Global) – Equity	\$3.571.428,00	\$14.285.714,00	2020	Green Climate Fund	Inversión de c	Transversal	Multisectorial
Dominica Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project	\$347.300,00		2020	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	AFOLU
Disaster Vulnerability Reduction Project	\$12.800.000,00	\$0,00	2020	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
Dominica Emergency Agricultural Livelihoods and Climate Resilience Project	\$1.900.000,00		2020	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	AFOLU
Compete Caribbean Partnership Facility	\$36.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial

Connecting communities for climate and disaster risk preparedness	\$942.700,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	Multisectorial
Climate Change Action for Gender-Sensitive Resilience	\$153.200,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
Support to the Development of Dominica's Climate Resilience and Recover Plan	\$7.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	Multisectorial
Connecting communities for climate and disaster risk preparedness	\$227.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	Multisectorial
Project for the Rehabilitation of Fishery Buildings and Equipment in Roseau and Marigot	\$83.900,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Marítimo
Caribbean Cyclone Cartography: Mapping histories, narratives and futures of hurricane 'resilience' in a changing climate.	\$220.800,00	\$0,00	2020	Bilateral-UK	Donación	Transversal	Multisectorial
Co-Total	US\$197.759.643,00	US\$43.048.854,00					
Total	US\$240.808.497,00						

Santa Lucía							
Nombre de proyecto	Cantidad	Co-Financiamiento	Año	Fuente	Instrumento	Proposito	Sector
Ridge to Reef Ecosystem Rehabilitation	\$811.811,00	\$0,00	2016	FAO	Donación	Adaptación	Marítimo
CCRIF SPC Payouts: Tropical Cyclone Matthew- Excess Rainfall policy	\$3.781.788,00	\$0,00	2016	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Transversal	Multisectorial
Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)	\$41.120,00	\$0,00	2016	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Multisectorial
Sustainable Development and Solar PV Demonstration and Scale-up Project	\$593.661,00	\$0,00	2016	Banco Mundial	Donación	Mitigación	Energía
Saint Lucia Disaster Vulnerability Reduction Project	\$1.690.000,00		2016	Banco Mundial	Préstamo	Adaptación	Multisectorial
	\$13.330.000,00	\$0,00			Donación		
Sustainable Energy Facility for the Eastern Caribbean	\$0,00	\$18.740.477,00	2016	Green Climate Fund	Préstamo	Mitigación	Energía
The Project for Improvement of Fishery Equipment and Machinery in Saint Lucia	\$4.152.000,00	\$0,00	2016	Bilateral-Japón	Donación	Transversal	Marítimo
Direct Aid Program: Climate Change Adaptation Through rainwater harvesting	\$13.400,00	\$0,00	2016	Bilateral-Australia	Donación	Adaptación	Agua
Provision of equipment for disaster prevention and rehabilitation	\$73.900,00	\$0,00	2016	Bilateral-Corea	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$423.500,00	\$0,00			Donación		
Supporting climate resilient investments in the agricultural sector in Saint Lucia	\$0,00	\$423.500,00	2017	Climate Investment Funds	Préstamo	Adaptación	AFOLU
	\$5.010.000,00	\$0,00			Préstamo		
Renewable Energy Sector Development Project	\$0,00	\$5.010.000,00	2017	Climate Investment Funds	Donación	Mitigación	Energía
Agricultural Transformation Project	\$13.250.395,00		2017	Union Europea	Préstamo	Adaptación	AFOLU
Green Architecture Promotion Pilot (GAPP) toward Building Resilience to the Adverse Effects of Climate Change	\$428.924,00	\$0,00	2017	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Infraestructura
CCRIF SPC Payouts: Tropical Cyclone Maria- Excess Rainfall policy	\$671.013,00	\$0,00	2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
Payments Under the TC/EQ Aggregate Deductible Cover (ADC): Tropical Cyclone Maria	\$123.750,00	\$0,00	2017	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
	\$20.000,00	\$0,00	2017	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
	\$12.300,00	\$0,00	2017	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
Integrated Ecosystem Management and Restoration of Forests on the South East Coast of St. Lucia	\$4.428.145,00	\$14.624.991,00	2018	GEF	Donación	Mitigación	AFOLU
Mobilisation of Technical Support for Climate Action NDC	\$98.500,00	\$0,00	2018	GIZ/NDC Partnership	Donación	Transversal	Multisectorial
Supporting Renewable Energy and Energy Efficiency in the Caribbean (EcoMicro)	\$87.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Canadá	Donación	Mitigación	Energía
	\$16.400,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Mitigación	Energía
The Project for Reconstruction of Bridges in Cul-De-Sac Basin	\$210.700,00	\$0,00	2018	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Infraestructura
Solar Carpot and electric vehicle	\$85.000,00	\$0,00	2018	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Transporte
Building resilience for adaptation to climate change and climate vulnerabilities in agriculture in Saint Lucia	\$9.860.000,00	\$0,00	2019	Adaptation Fund	Donación	Adaptación	AFOLU
GCF Readiness and Preparatory Support in Saint Lucia	\$380.000,00	\$0,00	2019	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Solar Car Port and Charging Stations	\$481.534,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Transporte
Improving Resilience of Human Settlements in Saint Lucia, Upgrading designated emergency shelters for longterm and short- term climate emergencies	\$200.000,00	\$0,00	2019	The Climate Technology Centre and Network (CTCN)	Donación	Adaptación	Infraestructura
Global Programme to Support Countries with the Shift to Electric Mobility	\$880.000,00		2019	GEF	Donación	Mitigación	Transporte
Support the Shift to Electric Mobility in Saint Lucia	45.000,00		2019	GEF	Donación	Mitigación	Transporte
Payments Under the TC/EQ Aggregate Deductible Cover (ADC): Tropical Cyclone Dorian	\$130.625,00	\$0,00	2019	Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility	Seguro	Adaptación	Multisectorial
Solar Carpot and electric vehicle	\$88.500,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Mitigación	Transporte
Building Resilience to Climate Change through the Promotion of Sustainable Energy Usage in St. Lucia Schools	\$110.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Transversal	Energía
Implementation of a geo-information center	\$29.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Italia	Donación	Transversal	Multisectorial
Skills to Access the Green Economy	\$213.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
Building National Disaster Response Capacity in Saint Lucia	\$120.000,00	\$0,00	2019	Bilateral-Corea	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$5.400,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$10.300,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$15.800,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial
	\$17.500,00	\$0,00	2019	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Multisectorial

Santa Lucía							
Building Resilience for Adaptation to Climate Change and Climate Variability in Agriculture in Saint Lucia	\$10.834.393,00	\$0,00	2019	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	AFOLU
Enhancing Saint Lucia's capacity, institutions and strategic frameworks to access climate finance for low-emission climate resilient pathways	\$660.000,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Environmental and social safeguards and gender roster support	\$100.000,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Millennium Highway and West Coast Road Reconstruction Project	\$52.405.100,00		2020	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
Sixth Water (Vieux Fort Water Supply Redevelopment) Project	\$31.072.000,00		2020	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
Saint Lucia Road Transport	\$7.950.000,00		2020	Caribbean Development Bank	Préstamo	Adaptación	Infraestructura
Biennial Update Report under the UNFCCC	\$352.000,00	\$0,00	2020	GEF	Donación	Transversal	Multisectorial
Early Warning Systems Readiness Proposal for Saint Lucia	\$1.747.223,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	Multisectorial
Enhancing Caribbean Civil Society's Access and Readiness for Climate Finance	\$1.296.958,00	\$0,00	2020	Green Climate Fund	Donación	Transversal	Multisectorial
Saint Lucia Human Capital Resilience Project	\$20.000.000,00		2020	Banco Mundial	Préstamo	Transversal	Multisectorial
Strengthening the Foundation for a climate-responsive agricultural sector in the Caribbean	\$1.999.943,00		2020	Green Climate Fund	Donación	Adaptación	AFOLU
	\$25.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	mitigación	Multisectorial
Compete Caribbean Partnership Facility	\$16.800,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
	\$573.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Francia	Donación	Transversal	Multisectorial
Sustainable Agriculture in the Caribbean	\$2.057.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Adaptación	AFOLU
The Project for Improving Health Environment at Playe Combined School	\$62.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Salud
The Project for Reusing Secondhand Garbage Collection Trucks in Castries	\$80.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Japón	Donación	Adaptación	Residuos
Finnpartnership programme	\$133.000,00	\$0,00	2020	Bilateral-Finlandia	Donación	Adaptación	Multisectorial
Climate Change Action for Gender-Sensitive Resilience	\$147.500,00	\$0,00	2020	Bilateral-Canadá	Donación	Transversal	Multisectorial
Saint Lucia Improving the Healthcare Infrastructure Project	\$215.800,00	\$0,00	2020	Bilateral-Corea	Donación	Adaptación	Infraestructura
Co-Total	US\$193.667.683,00	US\$38.798.968,00					
Total	US\$232.466.651,00						